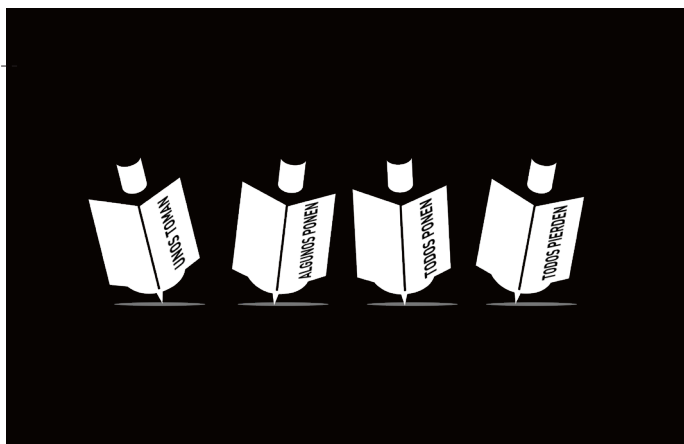


MÉXICOS
POSIBLES

ÍNDICE



ESCENARIOS MÉXICOS POSIBLES	3
UNOS TOMAN MÉXICO AGANDALLADO	7
ALGUNOS PONEN MÉXICO PASMADO	16
TODOS PONEN MÉXICO RESPONSABLE	23
TODOS PIERDEN MÉXICO FALLIDO	30
PARTICIPANTES	35
DONANTES	36

ESCENARIOS DE MÉXICOS POSIBLES

Los escenarios de México Posibles son un trabajo colectivo llevado a cabo por un grupo diverso de **90 personas** a lo largo de **6 talleres (2016-2018)**.

En estos talleres, personas que representan sectores que difícilmente dialogan o trabajan entre sí, se sentaron a crear un entendimiento común del país, escucharon la visión del “otro” y, a partir de esto, construyeron cuatro escenarios que describen posibles futuros de México hacia el 2030.

Un escenario es una historia de lo que podría acontecer. No es un pronóstico, una predicción o un plan de lo que debería suceder. Tampoco son las únicas posibilidades, pero fueron las que parecieron más útiles y/o desafiantes para los participantes cuyos puntos de vista están reflejados en esas narrativas.

Los escenarios son:

- Unos Toman: México Agandallado
- Algunos Ponen: México Pasmado
- **Todos Ponen: México Responsable**
- Todos Pierden: México Fallido

Cada uno describe cómo se podría ver el país en el 2030 en cuanto a su sistema político, Estado de derecho, violencias, desarrollo, participación ciudadana y su rol en el mundo. Los escenarios desarrollan lo que sucede en México en relación con las tres íes: ilegalidad, iniquidad e inseguridad.

Este trabajo fue conducido por Adam Kahane y Reos Partners, consultora internacional con una amplia experiencia en diseñar y facilitar proyectos de transformación sistémica en países como Sudáfrica, Colombia y Brasil y agendas tan complejas como democratización, política de drogas, educación y pacificación, entre otras.

Te invitamos a tomar un tiempo para pensar en qué podría pasar con el país, estamos seguros que si lo haces verás, al igual que nosotros, que el futuro no está escrito y que todos, incluyéndote, somos corresponsables de construirlo.



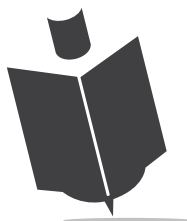
BUSCAMOS CONSTRUIR LAZOS DE CONFIANZA Y UN ESPACIO DE TRABAJO EN BENEFICIO DE MÉXICO



Incluso con visiones opuestas, mostramos que se puede dialogar y trabajar juntos

MÉXICO 2030

MATRIZ DE LOS ESCENARIOS



	1	2	3	4
SISTEMA POLÍTICO	<p>UNOS TOMAN: MÉXICO AGANDALLADO</p> <p>Hay un debilitamiento de las instituciones y pocos grupos de interés monopolizan la política. Se incrementa el financiamiento ilegal en los procesos electorales.</p>	<p>ALGUNOS PONEN: MÉXICO PASMADO</p> <p>Hay un Congreso plural y sin mayoría del Ejecutivo, lo que obliga a los actores del sistema político a hacer un esfuerzo por reconciliarse con la sociedad.</p>	<p>TODOS PONEN: MÉXICO RESPONSABLE</p> <p>Hay pesos y contrapesos más claros. Surgen medios de comunicación independientes. Hay una incidencia efectiva en la toma de decisiones estructurales como resultado de la presión de los ciudadanos organizados.</p>	<p>TODOS PIERDEN: MÉXICO FALLIDO</p> <p>Hay una mayor crisis de legitimidad y una ruptura del orden social. En respuesta a esta crisis, se otorgan más poderes al Ejecutivo y se erosionan los contrapesos institucionales. Se amplía el uso de la fuerza de seguridad.</p>
ESTADO DE DERECHO	<p>Prevalece la cultura de la ilegalidad y de la impunidad, el Estado de derecho es muy frágil. Se tiene un sistema de justicia corrupto e ineficaz, y se fortalecen los grupos criminales. Persiste una política de simulación.</p>	<p>Hay nuevas propuestas para fortalecer el Estado de derecho, pero en algunas regiones más que en otras. El Ejército se mantiene en las calles en tareas de seguridad pública.</p>	<p>Se modifican las leyes, pero, sobre todo, hay un cambio cultural en la aplicación eficaz y cotidiana de la ley, aunque ello se da paulatinamente.</p>	<p>Se declara un estado de excepción prolongado apoyado por amplios grupos de la sociedad. Los grupos marginados viven una agudización de la desconfianza en el sistema de justicia y buscan hacer justicia por sus propias manos. La sociedad se polariza.</p>
VIOLENCIA	<p>El crimen organizado y la violencia se arraigan y están presentes en una mayor extensión del territorio del país.</p>	<p>Se incrementa la violencia en algunas regiones por resistencia a los cambios. El crimen organizado diversifica aún más sus negocios.</p>	<p>El crimen organizado está contenido. Hay un esfuerzo consistente en prevenir violencias y el Estado va ganando control de todo el territorio.</p>	<p>Se multiplican los brotes de violencia que alcanzan una parte importante del territorio. Diversos territorios son controlados abiertamente por el crimen organizado. El desplazamiento interno se incrementa substancialmente. Aumenta la violencia sobre grupos históricamente excluidos.</p>

MÉXICO 2030

MATRIZ DE LOS ESCENARIOS



1

2

3

4

UNOS TOMAN:
MÉXICO AGANDALLADO

ALGUNOS PONEN:
MÉXICO PASMADO

TODOS PONEN:
MÉXICO RESPONSABLE

TODOS PIERDEN:
MÉXICO FALLIDO

DESARROLLO

En el ámbito económico, se profundiza la desigualdad. Pocos grupos se benefician del desarrollo económico y la mayoría carece de oportunidades. Se incrementan las diferencias entre regiones y hay crisis en el campo y en las zonas urbanas marginadas.

Se toman algunas medidas económicas razonables, pero sin afectar intereses. Persisten las desigualdades. Las mayores diferencias son regionales, pues algunos estados se ven más beneficiados por el crecimiento que otros.

Se exige mayor eficacia y transparencia en el gasto público, fortalecimiento de las finanzas públicas y estrategias económicas responsables. Hay una mejor adaptación a los cambios tecnológicos, en la escuela y en sectores productivos, y una profunda transformación del mercado laboral.

Se agudizan las diferencias regionales en el país. Hay zonas de prosperidad económica protegidas por las fuerzas armadas, otras zonas donde la actividad económica está paralizada, pero la mayoría se encuentra al margen del Estado, presa de la extorsión de autoridades o el crimen organizado.

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Existen pocos espacios de participación ciudadana y las élites tratan de utilizar los recursos a su alcance para mantener sus privilegios. Políticos independientes y grupos discriminados ven limitado su acceso a espacios de poder para la toma de decisiones.

Se incrementa la participación ciudadana de manera desigual por regiones.

La participación ciudadana adquiere mayor relevancia, pero hay curva de aprendizaje. La ciudadanía se vuelve muy consciente del gasto público, siendo un contrapeso al mal uso de recursos o posibles desvíos. La actuación de jueces es cada vez más profesional y autónoma.

La sociedad civil se polariza. Algunos grupos se manifiestan en apoyo al estado de excepción mientras que otros grupos ciudadanos radicalizan su protesta y se organizan para bloquear la acción del gobierno.

MÉXICO Y EL
MUNDO

La política comercial es dictada por los grupos de interés, incluidas las grandes empresas. México enfrenta presión política de los Estados Unidos con respecto al tema de la seguridad, en particular porque el país se convierte en lugar propicio para la actuación de organizaciones criminales transnacionales.

Prevalece el TLCAN, pero en condiciones menos favorables para México, por lo que la inversión decrece. Hay un ambiente anti-inmigrante en EE.UU. que provoca que muchos mexicanos regresen.

Se incluyen temas laborales y de corrupción en el TLCAN, que inciden en una mejor relación regional. Se comparte la responsabilidad de combatir al crimen organizado con Estados Unidos. Se exporta al mundo la riqueza cultural de México.

Hay crispación de las relaciones de México con el exterior. El desplazamiento interno aumenta la migración. El crimen organizado internacional aumenta su presencia en México y hay mayor injerencia extranjera en asuntos internos. ○



ESCENARIO 1

UNOS TOMAN: MÉXICO AGANDALLADO

Este escenario se caracteriza por su condición inercial en el que grupos de poder actúan activamente con el objetivo de proteger y mantener su poder, sus privilegios y su riqueza. Las las 3 íes –ilegalidad, inseguridad e inequidad– se incrementan progresivamente. Los grandes problemas del país no parecen susceptibles de ser enfrentados con eficacia, por lo que las acciones para atenderlos se limitan a contenerlos, mas no a solucionarlos.

SISTEMA POLÍTICO

Este escenario cuenta la historia de un México en el que, en general, las instituciones no gozan de credibilidad y la mayoría de los miembros de la clase gobernante carece de autoridad moral, desde la perspectiva de amplios sectores de la sociedad. Asimismo, en él la política es resultado del establecimiento de acuerdos a puerta cerrada y la ciudadanía no se siente representada por el gobierno a ningún nivel. En igual forma, sectores del poder económico han cooptado al poder político, lo que implica que en buena medida éste responde a los intereses privados. Como consecuencia, el bienestar y el interés de las mayorías no son los referentes que predominan en el diseño y en la aplicación de las políticas públicas. Dado que la gobernabilidad es el resultado de la relación entre las demandas de la sociedad y la eficacia –o no– con que el Estado las atiende, el ejercicio de gobierno transcurre entre la amenaza de grandes protestas de grupos organizados y periodos de tranquilidad relativa.

Ante el incremento de las 3 íes, el gobierno aumenta el gasto en materia de seguridad a costa del gasto en inversión social. El gasto en seguridad se da en forma reactiva y sin una estrategia clara para el mediano y largo plazo. Así pues, se privilegian estrategias de seguridad de corto plazo que se traducen en acciones como encarcelar a líderes de grupos criminales pero no se invierten recursos en programas que persigan resultados en el largo plazo, como los que corresponderían a mejorar las instituciones públicas o a brindar oportunidades a los jóvenes en riesgo de incurrir en actividades criminales. La lucha contra la delincuencia y el crimen sólo incrementan la violencia.

Bajo este escenario los partidos políticos funcionan como franquicias privadas que no representan los intereses de grupos sociales amplios; esa condición anula la participación de minorías políticas lo que se traduce en que el poder se reparta fundamentalmente entre las principales fuerzas partidarias, algunas con mayor peso que otras en diferentes zonas del país. Como parte del mencionado dominio, quienes son elegidos por la vía plurinominal mantienen el control de los puestos de dirigencia en las Cámaras y en las comisiones legislativas, marginando a los legisladores independientes o que no obedecen de manera incondicional a las directrices partidistas. Los candidatos a la reelección por la vía de la representación proporcional impiden que la vinculación entre legisladores y ciudadanos representados crezca y se consolide.

Por inercia se mantiene el elevado financiamiento público a los partidos, continúa prevaleciendo una fiscalización no efectiva de los gastos de campaña, mismos que con frecuencia exceden el límite establecido por la ley. Esto deja un enorme espacio al crimen organizado y a poderes fácticos (entre ellos Iglesias de distinta denominación) para financiar candidaturas. Los donativos de campaña se convierten en semillas de corrupción, pues quienes donan buscan una renta sobre su “inversión”. Así, las reformas vigentes en materia electoral continúan generando las condiciones que posibilitan el mantenimiento del *statu quo* por parte de la «partidocracia»; situación apuntalada por la existencia de grupos privilegiados que continúan utilizando dinero e influencia para consolidar sus propios intereses. No se fomenta un entorno en el cual se escuchen las opiniones de las minorías.



Además de los obstáculos de financiamiento, el diseño institucional dificulta en un alto grado la viabilidad de las candidaturas independientes; lo que refuerza su limitada presencia y acción en espacios de participación política por la vía institucional. Como resultado de ello, en el Poder Legislativo hay una disminución severa de su número, con una representatividad de menos del 25 por ciento. En un contexto en el que el éxito de las candidaturas depende del acceso a recursos para financiarlas, llegan al poder candidatos afines a la conservación del *statu quo* que sólo favorecen a los grupos de poder.

La paridad política que se había logrado pese a enormes resistencias se ve amenazada y aun cuando en la legislación se sostiene la obligatoriedad de nombrar un número similar de candidatos de ambos sexos, en la práctica los partidos son muy hábiles en cubrir las cuotas correspondientes a mujeres con candidaturas que tienen baja probabilidad de ganar, por lo que no se logra una paridad efectiva entre los políticos electos.

La clase política en el poder prioriza las ganancias a corto plazo por encima de la implementación eficaz de políticas públicas a largo plazo y no rinde cuentas a la ciudadanía.

En este escenario los medios masivos de comunicación que cuentan con concesiones del Estado son cada vez menos independientes, al tiempo que, de manera disfrazada, se destinan altos presupuestos a la publicidad gubernamental. Este fenómeno fomenta una codependencia entre medios de comunicación y gobiernos en turno, afectando la calidad de la información. Los medios que no se alinean al mensaje del gobierno son cada vez menos y los costos de su disidencia suelen ser altos.

Existen proyectos de periodismo independiente que cada vez cobran mayor credibilidad y relevancia, aunque con frecuencia trabajan en la clandestinidad, lo que es aprovechado por la clase política en el poder para infiltrar notas falsas y así desacreditar al periodismo crítico. En este sentido, las redes sociales tienen un papel fundamental y se fortalecen en la medida en que aumenta la penetración de Internet en la población. Por otra parte, los medios internacionales cada vez fungen más como un contrapeso a la parcialidad de muchos medios nacionales y locales.

En este escenario, las cúpulas empresariales y políticas no apuestan por un cambio de fondo y sólo un número reducido de ellas ve con preocupación la descomposición social; de suerte que, en general, los grupos de poder buscan proteger sus privilegios en perjuicio de los intereses colectivos. Cada vez, con mayor frecuencia, quienes forman parte de tales cúpulas mudan su residencia y buscan invertir en países más estables.

Los pocos grupos que sí apuestan por el cambio de fondo, forjan alianzas locales que, con vaivenes, resisten y generan riqueza. Aunque hay sectores, grupos y empresas competitivos a nivel mundial, para la mayoría las posibilidades de crecer y competir exitosamente son escasas o nulas, a excepción de esfuerzos muy focalizados que, con el transcurso de los años, se convirtieron en prácticas replicables en distintas regiones del país. Una gran parte de la actividad empresarial ni crece ni agrega más valor a los productos y servicios generados, debido a que un Estado de derecho débil desincentiva la inversión y, en cambio, incentiva la economía informal.

En un mayor grado que en los demás escenarios, en este la política está al servicio de los poderes fácticos.

ESTADO DE DERECHO

Este escenario cuenta la historia de un país en el que la cultura de la ilegalidad como violación consciente de la ley permea a los gobiernos en sus distintos niveles, así como a todos los sectores de la sociedad. A esto se suma una cultura de la ilegalidad, es decir, un desconocimiento no menor de las normas jurídicas. La población vive en un entorno de incertidumbre constante pues se carece de árbitros imparciales, y la aplicación de la justicia es selectiva y depende de variables como género, situación económica, y capacidad de influir y/o corromper al sistema judicial. Esto genera inseguridad y frustración, ya que la debilidad del Estado de derecho puede traducirse –y de hecho con gran frecuencia se traduce– en la indebida afectación de los individuos, lo mismo en la seguridad personal como patrimonial. En forma injusta se pueden perder propiedades, negocios, puestos, bienes personales, o aun la libertad.



La impunidad que priva en el país se refleja en la ausencia de credibilidad del sistema judicial como instrumento para regular las relaciones económicas, políticas y sociales. Por tanto, las tareas de legislar, de procurar y de impartir justicia no son respetadas por gran parte de la sociedad. Lo anterior se exacerbaba cuando la impunidad impide que se avance en la investigación y en el castigo de casos de corrupción o en otros en los que se ha violado la ley, y en los cuales la ciudadanía movilizaba exige que sean atendidos por las autoridades.

En el caso específico de las mujeres víctimas de violencia, uno de los mayores obstáculos a los que se siguen enfrentando es la deficiente procuración de justicia, ámbito en el que continúan siendo re-victimizadas. Asimismo, preocupa el incremento de asesinatos de mujeres ocurridos tanto en sus hogares como en espacios públicos, en la mayoría prevenibles, y en los que el principal sospechoso es la pareja de la víctima. Las instituciones creadas para protección de las mujeres se ven rebasadas en su capacidad por los delitos penales de violencia familiar y sexual, así como por los feminicidios.

El Estado de derecho es tan débil y el acceso a la justicia tan desigual, que se normaliza el hacer justicia por mano propia como mecanismo para enfrentar la impunidad.

El comportamiento ciudadano continúa caracterizándose por el no acatamiento de la ley y por privilegiar relaciones bilaterales en las que los beneficios mutuos son ilegales. Así, la cultura de la ilegalidad se refleja cotidianamente en cualquier transacción y crece exponencialmente al observarse el avance del crimen organizado, el de la corrupción gubernamental y privada y el de las decisiones arbitrarias en el sistema de impartición de justicia. Este escenario se caracteriza por la persistencia de estos fenómenos arraigados en la historia del país.

El Estado de derecho es tan débil y el acceso a la justicia tan desigual, que se normaliza el hacer justicia por mano propia como mecanismo para enfrentar la impunidad. Asimismo, se establece un clima de violencia latente que permite al aparato del Estado actuar de manera extra-judicial, lo mismo para enfrentar la impunidad y el crimen organizado, que para ocultar y facilitar la corrupción y los arreglos extra-institucionales de los grupos de poder. Al mismo tiempo surgen personajes que pretenden resolver los problemas de la inseguridad y del crimen organizado promoviendo la integración de grupos auto-armados o de grupos ciudadanos de vigilancia, pero no tanto para denunciar los delitos, como para acceder a una "justicia" al margen del sistema del poder judicial.

En el sistema de justicia impera la falta de capacitación, el exceso de trabajo, la incertidumbre laboral y la carencia de oportunidades para el desarrollo de recursos humanos, lo que afecta el desempeño de quienes lo integran. Por otra parte, el sistema penitenciario no favorece la reinserción social de los hombres y mujeres que salen de prisión, ya que, por el contrario, continúa siendo un espacio de corrupción, crimen y violencia en el que persiste la asociación entre autoridades y criminales, y es fuente de reclutamiento por parte de organizaciones criminales.

En 2024 ningún gobernador detenido por corrupción ha sido sentenciado ni se le han confiscado sus bienes. Ningún otro funcionario de alto nivel es perseguido y ninguna autoridad, incluidos los expresidentes de la República han sido perseguidos por corrupción. Si bien llegan a estar brevemente bajo arresto domiciliario de manera preventiva, nunca se presenta un caso sólido ante los tribunales. Esto contribuye a que la corrupción y la impunidad continúen extendiéndose en todos los ámbitos del país.

El gobierno federal y local, los líderes de los partidos políticos y, en general, quienes controlan el legislativo, no avanzan en el desarrollo de la agenda anticorrupción porque se verían perjudicados, por lo que su mayor interés es preservar el *statu quo*. Así, las propuestas de reformas y políticas públicas en la materia representan avances menores comparados con los estándares internacionales. Cuando sí hay avances estos son el efecto de presiones ejercidas por gobiernos y organismos financieros y de derechos humanos



de otros países y por esfuerzos heroicos de muchas personas en distintas regiones del país que se sostienen en la lucha pese a enormes presiones y riesgos personales. Los esfuerzos no son eficaces porque no hay voluntad entre los políticos y las autoridades a cargo de las instituciones para que así sea.

En lo que respecta a la policía, no se invierte en el desarrollo de policías a nivel estatal. Ésta continúa generando una gran desconfianza en la ciudadanía, al tiempo que se carece de estrategias y medidas eficaces para dignificar sus cuerpos. Hay policías preventivas que no están entrenadas o equipadas para enfrentar o resistir al crimen organizado, la policía de investigación no está debidamente capacitada para salvaguardar la cadena de custodia, y los salarios que perciben los cuerpos policiacos en estados y municipios son muy bajos. Falla la coordinación interinstitucional y se hace un mal uso de los sistemas de registro y de inteligencia. Se continúa debatiendo el tema del mando único, pero el verdadero problema radica en que no hay funciones definidas entre distintos cuerpos policiales y en que éstos carecen de parámetros compartidos. Los recursos públicos se invierten en la lucha contra la inseguridad y la delincuencia vía las fuerzas armadas, y no en el fortalecimiento de las policías y de los sistemas de procuración de justicia.

Todo ello se traduce en la persistencia de un arraigado círculo vicioso: el que encarnan policías mal preparadas, mal pagadas y mal tratadas que no son dignas de crédito social y que son fácilmente cooptadas –bajo amenazas o no– por el crimen organizado y desorganizado. Se impulsan acciones que ponen en peligro las reformas en defensa de los derechos humanos y se incrementan los discursos en los que se solicita abrogar la reforma al artículo 1 constitucional. Los avances logrados en materia de derechos humanos comienzan a difuminarse en virtud del impulso a reformas que atentan contra las libertades de la ciudadanía.

Bajo este escenario, con relación al tema de la armonización legislativa no se toman en cuenta los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que justamente obligan a los Estados a homogenizar sus leyes federales y locales. Como resultado de ello son las mujeres y las niñas quienes se ven afectadas en mayor grado debido a que por tal omisión no en-

cuentran respaldo jurídico en las propias leyes. Mientras el discurso del Poder Ejecutivo y de su titular en este escenario es que se está fortaleciendo el Estado de derecho, en realidad lo que se hace es normalizar facultades que en años previos eran consideradas como violaciones a los derechos humanos.

VIOLENCIAS

En este escenario, la violencia y la inseguridad se incrementan, cobran muchas formas y afectan de manera diferenciada a los diversos grupos de la población, dependiendo de sus recursos y de los roles que desempeñan en la sociedad, así como de su género. Los crímenes por prejuicio siguen aumentando, y no se ve una respuesta clara del Estado.

En el caso de las mujeres, la casa y los espacios comunitarios son lugares de riesgo. De hecho, la violencia comunitaria se dispara en amplias zonas del país y los feminicidios se incrementan en municipios y localidades, de manera que niñas, adolescentes y adultas jóvenes corren un altísimo riesgo de ser violentadas en su camino a la escuela o al trabajo o incluso secuestradas para distintos fines.

Aunque Organismos Internacionales hacen recomendaciones puntuales a México en seguimiento a la sentencia “Campo Algodonero” y apoyan a los grupos organizados de mujeres, la vigilancia y persecución a estos grupos aumenta.

Las personas y las familias que cuentan con la capacidad financiera suficiente, compran y aseguran su protección por medio de la contratación de seguridad privada, del uso de autos blindados y del acompañamiento de escoltas, o aun resguardándose en el extranjero. Asimismo, abundan las zonas habitacionales y comerciales, los edificios de negocios y los restaurantes que se mantienen relativamente al margen de la violencia, mediante la adopción de estrategias de seguridad privada.

Las clases medias y de menores ingresos enfrentan diversos tipos de violencia y de inseguridad en su entorno. Un número creciente padece día con día la violencia en el hogar, en el trabajo y en la comunidad. Las desapariciones forzadas alcanzan cifras alar-



mantes, provocando altos costos asociados, como el aumento en gastos de atención de salud y de servicios jurídicos; o pérdidas de productividad que impactan sensiblemente el presupuesto público nacional. Los crímenes por homofobia aumentan.

El crimen organizado se fortalece, y cada vez involucra a más grupos armados. En algunas zonas del país, las familias que no pueden pagar por seguridad se ven forzadas a buscar acuerdos con dichos grupos, y jóvenes con menos oportunidades son más susceptibles a unirse en búsqueda de un mejor futuro. Esta degradación constante de la seguridad y el incremento de la violencia provocan un deterioro en la confianza en el Estado, y a pesar de que se aumentan los recursos destinados a las fuerzas de seguridad, hay un sentimiento de pesimismo e inseguridad creciente en la mayor parte de la población.

Este escenario nos habla de un país en el cual la desigualdad fortalece los privilegios de las élites. El porcentaje de la población que vive en la pobreza supera el 55 por ciento hacia el 2024.

Así, impera tanto la violencia abierta como la violencia latente. La violencia se convierte en el contexto de la vida política, en ocasiones se dan estallidos de violencia abierta por parte del Estado, del crimen organizado y de organizaciones sociales de corte antisistémico. Sin embargo, en la mayoría de los casos la violencia se ejerce mediante la negación de derechos a personas y a comunidades. Los derechos están en leyes, tratados y códigos pero no en la vida cotidiana de los mexicanos.

Cobra realidad la institucionalización ilegal de la violencia del Estado de manera selectiva contra sus opositores, mediante represión, persecución, espionaje, detenciones arbitrarias, el uso indebido de la fuerza, las desapariciones forzadas, y los asesinatos. Algunos casos atraen la atención mediática y de organizaciones internacionales de protección de los derechos humanos, se difunden por medio de las redes sociales y propician movilizaciones ciudadanas.

Lideradas por la sociedad civil, las campañas de visualización de las vulneraciones sistemáticas y constantes de los derechos humanos por el Estado empiezan a generar un mayor número de recomendaciones de organismos internacionales, entre ellas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ello genera expectativas de la sociedad, en el sentido de que tales recomendaciones impulsen cambios legislativos de gran calado. Sin embargo, a pesar de que se abren investigaciones y procesos y, en ciertos casos, se promulgan reformas legislativas, la corrupción y la impunidad impiden que se emprendan acciones más allá de la atención de casos puntuales –para simular que se está actuando–, aun con la presión de la comunidad internacional.

En este escenario, la legalización de la marihuana en los Estados Unidos, si bien reduce la violencia en ciertos ámbitos, fortalece la diversificación de las actividades del crimen organizado en otros rubros, además de los habituales, como el secuestro, la extorsión, la trata de personas y el tráfico de armas. Asimismo, las políticas anti-migratorias estadounidenses y las consecuentes expulsiones de indocumentados provocan un aumento en la migración de norte a sur, lo que a su vez genera un incremento de la violencia que ya abrumba al país, y contribuye a la consolidación de organizaciones criminales transnacionales.

En general, este escenario nos cuenta una historia de pesimismo creciente ante el nivel de violencia que vive en la cotidianidad la ciudadanía, en manos del crimen organizado, y del mismo gobierno que no está dispuesto solucionar los problemas que enfrenta la nación. Hacia el 2030 México ya se sitúa entre los cinco países más violentos del mundo.

DESARROLLO

En este escenario continúa perpetuándose el crecimiento económico mediocre, excluyente y desigual del país, con una gran parte de la sociedad viviendo en pobreza. En las últimas cinco décadas el crecimiento promedio ha sido menor al 2 por ciento del PIB.

Este escenario habla de un México en el que la infancia y las juventudes siguen siendo invisibles para el Estado y la sociedad, lo que implica que buena parte ...



de la población no tiene acceso a determinadas oportunidades desde los primeros años de vida. Asimismo, diversos grupos son discriminados y excluidos por su sexo, género, apariencia, creencias, preferencia sexual, clase social, origen étnico o auto-adscripción identitaria a un pueblo originario, así como por la existencia de barreras lingüísticas, situación de precariedad, de migración, de calle, de prostitución o por trabajo sexual, entre otros motivos. Esto reproduce el círculo de pobreza y exponencia la desigualdad.

Este escenario nos habla de un país en el cual la desigualdad fortalece los privilegios de las élites. Por ello la explotación de las personas que carecen de oportunidades o educación es tolerada y considerada como algo "natural". De esta manera, quienes gozan de mayor riqueza, poder y privilegios, son capaces de generar oportunidades para sus familias y negociar acuerdos –legales o al margen de la ley– favorables a sus intereses; quienes no, continúan viviendo en un país en el que la movilidad social es muy restringida y un número creciente de ellos opta por operar al margen de la ley. El porcentaje de la población que vive en la pobreza supera el 55 por ciento hacia el 2024.

La participación de las mujeres en condiciones de igualdad en todos los espacios sociales ha dejado de ser una prioridad, fuertes campañas mediáticas refuerzan los estereotipos y roles tradicionales atribuidos a mujeres y hombres. Surgen fuerzas políticas cuya plataforma se basa en reforzar la desigualdad de género. Puesto que el modelo económico difícilmente permite que hombres y mujeres puedan conciliar labores domésticas con el trabajo en el mercado laboral, en su gran mayoría son las mujeres quienes buscan empleos de medio tiempo o aceptan empleos en condiciones precarias, lo cual refuerza las desigualdades.

En los jóvenes se habla ya de generaciones con mayor nivel de estudios y capacitadas en uso de tecnologías, pero con menores oportunidades laborales y salarios precarios. Para 2024 ya se hace referencia a una generación perdida, pues el bono demográfico fue desperdiciado, lo que, si bien impacta en el corto plazo, en los siguientes 30 años será resentido dramáticamente. Respecto a los créditos y apoyos económicos otorgados al emprendimiento, el gobierno actual de-

cide eliminarlos, lo que provoca entre otras cosas una disminución en la tasa de empleo formal y mayores niveles de pobreza a nivel nacional.

En materia de crecimiento económico, este escenario nos cuenta la historia de una tasa de crecimiento prácticamente estancada, cuyo crecimiento potencial se mantiene en 2 por ciento en las inmediaciones del 2030, y de la cual la mitad es inercial por el aumento de la población. La tasa es similar a una caída generalizada del crecimiento en países desarrollados, lo que genera controversia sobre la posibilidad de que las causas del estancamiento son internas o externas. A esta tasa de crecimiento los padres no tienen la certeza de que sus hijos tendrán un nivel de vida mejor al suyo.

En general, este escenario nos habla de un Estado ineficiente en el que la recaudación fiscal se ve afectada por la alta evasión de quienes tienen mayor poder adquisitivo, pues no se confía en la forma en la que el gobierno administra y gasta el dinero. Se contrae deuda cara, el peso es débil y volátil, y hay inestabilidad en variables macroeconómicas. Más grave aún: se pierde la disciplina macroeconómica de las finanzas públicas, crece el gasto y el endeudamiento, agudizando la crisis económica del país. México baja de calificación crediticia y pierde la confianza de los mercados financieros internacionales. Se agudiza la presión sobre el peso y la moneda se devalúa de manera importante.

Entidades con reputación de tener un mayor Estado de derecho y con precedentes positivos en materia de seguridad reciben más inversiones por parte de la clase empresarial mexicana y extranjera; en otras los niveles de inseguridad disuaden a los inversionistas de arriesgar sus capitales, lo que contribuye a su menor crecimiento. Así, las oportunidades económicas varían en los estados, municipios y regiones, y fundamentalmente dependen de las decisiones de los actores con recursos económicos e influyentes del país, mismos que privilegian el *statu quo* y rara vez buscan impulsar el cambio para mejorar las condiciones generales de la población.

Las condiciones desfavorables del mercado internacional y la agudización de los efectos del cambio climático profundizan las brechas regionales ya ...



existentes. En entidades como Chiapas o Oaxaca persisten niveles seculares de pobreza que se acercan al 80 por ciento, mientras que en estados como Nuevo León y Baja California rondan el 20 por ciento. Las brechas también son visibles entre grupos sociales. La pobreza extrema de mujeres indígenas rurales es de 45 por ciento, mientras que en el caso de hombres no indígenas urbanos es de 4 por ciento. En general se reducen los trabajos con prestaciones y se brindan facilidades para contratar de formas más precarias, lo que también repercute en el incremento de la desigualdad.

Este escenario también nos habla de una crisis sostenida en el campo y con relación a los recursos naturales. Aumenta el despojo de tierras y territorios con fines extractivos, imponiéndoseles modelos de desarrollo a comunidades enteras y generando un crítico deterioro ambiental. La falta de reglas en materia de propiedad de la tierra y de un sistema efectivo de justicia genera incertidumbre en todos los actores y conlleva a una mayor marginación de los pueblos originarios, lo que radicaliza a grupos que deciden defender sus propios derechos al percibir que el Estado no lo hace por ellos. Se incrementan los brotes de violencia entre comunidades y autoridades por dichos conflictos de tierras y derechos de vía (carreteras, ductos, minas, parques eólicos, entre otros) que benefician a las empresas dueñas o concesionarias de la infraestructura, pero no a las comunidades. Esto conlleva a un aumento de la migración forzada.

En materia de educación, el sistema público continúa caracterizándose por su atraso, lo que limita las oportunidades de progreso de niñas, niños y jóvenes de escasos recursos. Pese a que hay avances en las reformas educativas, éstas muestran su insuficiencia pues no son diseñadas tomando en cuenta las necesidades educativas de los alumnos en los diferentes contextos del país. El nuevo modelo educativo

tampoco llega a buen puerto porque no se hacen los esfuerzos necesarios para capacitar al cuerpo docente. Además, existe una polarización en los grupos de maestros organizados; por un lado, aquellos que no quieren capacitarse para brindar educación enfocada en la innovación y en el desarrollo tecnológico; por el otro, un grupo liderado por jóvenes de recién ingreso a través del sistema de examen y evaluación, que impulsan la innovación y el desarrollo social, económico, laboral y tecnológico.

Adicionalmente, el sistema educativo favorece condiciones culturales de relaciones interpersonales violentas y machistas. El sistema tampoco dota de mejores habilidades a jóvenes, ni considera la demanda de nuevos empleos para construir una mejor sociedad ni para ingresar a un mercado laboral en el que se les exigen competencias que no se forman en los espacios educativos. Se evidencia también la poca eficacia de las políticas públicas implementadas para incorporar a las mujeres en las carreras STEM (por sus iniciales en inglés, las que corresponden a ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Lo que genera un rezago en la competitividad sobre todo digital y tecnológica de México ante el resto del mundo.

En materia de seguridad social, este escenario nos habla de un sistema que además de estar colmado de ineficiencias en todos los niveles, no llega a todos los ciudadanos. Uno de los principales problemas son los embarazos de niñas y adolescentes, muy por el contrario, con relación a lo establecido en 2015, cuando en la Estrategia Nacional de Prevención del Embarazo en Adolescentes se propuso reducir “a la mitad la tasa de fecundidad entre las adolescentes mexicanas de 15 a 19 años de edad, y erradicar el embarazo en niñas menores de 15 años”. Para el 2020 el país se enfrenta a un incremento en la tasa de fecundidad de 90 nacimientos por cada mil adolescentes. Hay disparidad entre las instituciones y entre las regiones respecto a la cobertura, el acceso efectivo y la calidad en los

Surgen grupos de jóvenes que se radicalizan impulsados por el propósito de transformar la realidad social, económica y política del país y grupos subversivos con sus propias ideologías y agendas.



servicios, pero en general los sindicatos se encuentran al servicio de las élites, y los pocos sindicalistas que no están de acuerdo, protestan, se radicalizan, y terminan por recurrir a la violencia.

Al hablar del medio ambiente, este escenario cuenta una historia de un futuro en el que la extracción se da sin ningún contrapeso, con el crimen organizado participando activamente en la explotación de recursos como la minería o las maderas. Las regulaciones existentes son insuficientes, pero el desdén al cambio climático conduce a un marco en el que el desabasto de recursos es visto por algunos como parte normal del proceso. La degradación ambiental impacta en mayor medida a hogares vulnerables, y conlleva en el mediano y largo plazo a desplazamientos, pues los territorios se vuelven inhóspitos.

En este escenario, se sigue observando un sistema de protección social fragmentado, con servicios diferentes para la población. Asimismo, cerca de 7 mil programas gubernamentales y acciones encaminadas a resolver problemas de desnutrición, seguridad alimentaria, sobrepeso y obesidad pero siguen desarticulados entre sí y con distintas formas de abordarlas por lo que no logran mejorar la situación. Continúa creciendo aceleradamente la prevalencia de enfermedades metabólicas como diabetes y obesidad alcanzando 30 millones de personas para el 2030. No alcanza el presupuesto gubernamental para atender completamente a tal cantidad de personas.

Finalmente, en este escenario vemos un México inmerso en un proceso de evolución de su cultura debido a las personas que llegan de los Estados Unidos. Migración que es resultado de la promulgación de leyes y del establecimiento de disposiciones en el país vecino con el fin de expulsar a dreamers y a quienes ilegalmente desempeñan trabajos de mano de obra, a lo que se suma la migración de Centro y Sudamérica. En razón de este fenómeno la cultura mexicana termina diluyéndose y perdiendo los rasgos de una identidad que la distinguía. Ello genera nuevos retos y tensiones entre quienes se pronuncian a favor de la asimilación de prácticas culturales foráneas y entre quienes reivindican el derecho a mantener su identidad frente a dichas prácticas. Se gesta un nuevo sincretismo cultural en el país.

La desigualdad y el privilegio de unos cuantos en el poder no contribuye al enriquecimiento cultural, hay un desprecio por lo autóctono. Se genera mayor ingreso para quienes detentan el poder, pero no para quienes habitan en esas comunidades.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este escenario habla de un futuro en el que paulatinamente grupos diversos de la sociedad se movilizan de manera organizada para demandar la reducción de las 3 íes y un mayor respeto a los derechos humanos, utilizando para ello fundamentalmente los recursos que les ofrece la tecnología, sobre todo las redes sociales. De esta manera logran generar un interés masivo en torno a las 3 íes; ejercer presión para que la propia sociedad se organice; y, asimismo, que organismos internacionales ejerzan presión sobre el gobierno.

Grupos de poder y élites diversas identifican a esos grupos como sus adversarios, y actúan para prevenir su incidencia; es decir, para impedir que, a manera de contrapesos efectivos, pudieran constituirse en algo más que un inconveniente manejable. De igual forma, crece el número de asesinatos de miembros de organizaciones de la sociedad civil que defienden y exigen el respeto a los derechos humanos y vigilan su cumplimiento.

La violencia aumenta en diversos ámbitos de la sociedad. Ante esto hay una reacción social que se traduce en el hecho de que sus miembros tratan de proteger a sus familias, con una precaria visión del bien común y en el contexto de una cohesión social vulnerable.

Surgen grupos de jóvenes que se radicalizan impulsados por el propósito de transformar la realidad social, económica y política del país y grupos subversivos con sus propias ideologías y agendas. Con el tiempo, se evidencia una simbiosis creciente entre el crimen organizado y grupos ciudadanos, lo que termina por generar un complejo entramado de intereses divergentes y opuestos que propicia que dichos grupos sean poco eficientes en generar un impacto real en las decisiones del gobierno y en el ámbito de las políticas públicas.



En conclusión, este escenario muestra un país en que el espacio para la participación ciudadana en las formas tradicionales es reducido—especialmente para los grupos tradicionalmente excluidos—, al mismo tiempo que se evidencia el tamaño del reto de generar formas renovadas de participación para combatir las desigualdades sociales y económicas. Si bien grupos sociales logran organizarse y movilizarse, su impacto es limitado, no cuentan con refuerzos de redes o alianzas consistentes, y no son capaces de consolidar proyectos de largo aliento.

MÉXICO Y EL MUNDO

En este escenario la imagen de México en el ámbito internacional continúa deteriorándose y su reputación de país con un alto grado de corrupción y en el que se cometen numerosas violaciones a los derechos humanos limita significativamente la autoridad moral y la capacidad del gobierno de tener incidencia en el plano internacional.

En Estados Unidos México continúa siendo foco de odio y de sentimientos y expresiones racistas, lo que a su vez empieza a generar en nuestro país una reacción contra los Estados Unidos. La falta de crecimiento económico lleva a un incremento de la migración hacia el norte de la frontera, lo que contribuye a un crecimiento constante de estas tensiones.

Este escenario habla de un futuro en que el país, debido al creciente debilitamiento de sus insti-

tuciones, se convierte en territorio fértil para la operación de redes criminales transnacionales. Estas redes son asociadas con los capos nativos del narcotráfico, con casos de violencia que cruza la frontera norte y refuerza el discurso racista que, hacia el 2030, está aún más arraigado y extendido en la sociedad estadounidense.

Respecto a los acuerdos internacionales adoptados por el Estado mexicano, a seis años del límite para cumplir con los 17 objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, el avance alcanzado en el 2024 se detiene afectando a amplios sectores de la sociedad.

Asimismo, se incrementan los conflictos bélicos en distintos continentes y regiones del planeta lo que, sumado a la adopción de políticas económicas proteccionistas por parte de varios países, disminuye los flujos comerciales en el mundo, afectando las cadenas globales de producción. En el caso de México, la incapacidad como país de reaccionar de manera eficaz a dichos cambios en las dinámicas comerciales lleva a un incremento en los despidos masivos y el cierre de empresas en sectores como el automotriz, el aeroespacial y el de electrodomésticos.

Finalmente, en este escenario, la percepción de falta de control del Estado en el plano internacional lleva a que los inversionistas, tanto extranjeros como nacionales, busquen establecer islas de seguridad económica y política donde puedan operar. ☉

La imagen de México en el ámbito internacional continúa deteriorándose y su reputación de país con un alto grado de corrupción y en el que se cometen numerosas violaciones a los derechos humanos limita significativamente la autoridad moral y la capacidad del gobierno de tener incidencia en el plano internacional.



ESCENARIO 2

ALGUNOS PONEN: MÉXICO PASMADO

Este escenario se caracteriza porque en él los cambios impulsados por el gobierno son limitados. Un grupo reducido de agentes de cambios cuyos miembros pertenecen a la sociedad civil, al gobierno o a la iniciativa privada, aprovecha el descontento para fortalecerse e incidir en que se trabaje con mayor eficacia e intensidad en la reducción de las 3 íes, desde distintos frentes. Sin embargo, hay una marcada separación entre los tomadores de decisiones y la sociedad. El trabajo no genera el mismo efecto a lo largo del territorio nacional, lo que se traduce en una disminución inconsistente de las 3 íes.

Aunque se dan logros importantes, que están contruidos mediante acuerdos cupulares, no se soluciona el malestar ciudadano con relación al sistema político. Dicho malestar puede abrir las puertas a candidatos populistas de izquierda o de derecha, lo que a su vez puede potenciar alguno de los otros escenarios.

SISTEMA POLÍTICO

Este escenario nos cuenta la historia de un México en el que llega un nuevo liderazgo a la Presidencia. Se establecen alianzas políticas y legislativas para concretar acuerdos y se pretende trabajar con grupos de la sociedad organizada, pero en general dichas alianzas son frágiles y poco duraderas, vulneradas por su poca consistencia y por un clima de gran desconfianza. El descontento de la ciudadanía se ve reflejado lo mismo en manifestaciones pacíficas, que en enfrentamientos violentos.

Un grupo de líderes políticos impulsa varias iniciativas para enfrentar las 3 íes. Particularmente buscan combatir la corrupción, la impunidad, la desigualdad, y la violencia. Una parte de esta clase política con poder real está convencida de que un impulso importante para el país radica en aprobar leyes y llevar a cabo iniciativas para combatir la corrupción. Parten de la idea de que, si se reduce el número de casos en que tienen lugar las excepciones a la ley, mejoran los resultados del combate a la inequidad, a la ilegalidad y a la inseguridad. Sin embargo, por temor a enfrentar a los poderes fácticos y en razón de la posible inestabilidad política que ello pudiese ocasionar, la agenda que logran colocar en última instancia es mínima –en comparación con lo que se necesita, se desea y se espera–, de manera que las vías comunicantes con la sociedad civil se deterioran y no se logran resultados concretos ni profundos.

En general se percibe que hay una desconexión entre quienes proponen las reformas y los grupos que padecen los efectos más lesivos generados por las 3 íes. Asimismo, hay miembros de la clase política y de la sociedad civil que se resisten a cambios profundos porque amenazan su influencia, poder y privilegios. También hay una fuerte discusión ideológica que contrasta valores y posiciones políticas divergentes. En ese sentido, el Poder Legislativo se convierte en actor más relevante pues cuenta con la capacidad de ser un contrapeso del Ejecutivo; pero dividido como está y sin estímulos para generar alianzas con visión de largo plazo, suele quedar al borde de la parálisis o bloquear esfuerzos de cambio importantes. Así, desde la Presidencia de la República la tentación autoritaria está presente porque se desea un gobierno eficaz, incluso a costa de los procesos democráticos y de los pesos y contrapesos.

Los cambios impulsados no satisfacen del todo a la sociedad en general, pero tampoco a sectores como el empresarial.

Se sigue pretendiendo que las “grandes” soluciones deben surgir de “una” autoridad, motivo por el que se continúan utilizando esquemas básicamente patriarcales que no consideran a toda una serie de grupos que son “invisibles” como son mujeres, indígenas, jóvenes en situación de vulnerabilidad, etc. De esta ...



manera, una de las mayores resistencias es la que se manifiesta contra el cambio cultural en beneficio de la igualdad de género.

En algunos congresos locales, debido al crecimiento de legisladores independientes y a una manera honesta de hacer política de líderes de partidos a nivel estatal se viven cambios interesantes. No obstante, estos cambios se juegan su continuidad, porque la propia continuidad de ingreso de personas independientes es muy precaria, dado que partidos tradicionales los ven como una amenaza a la propia subsistencia del sistema de partidos. Esta tensión continuará en los siguientes años, pero a la postre obligará a los partidos tradicionales a incrementar su contacto, atención y negociación con amplios sectores de la ciudadanía.

La paridad continúa abriéndose paso, pero a duras penas. En muchos casos hay simulación –es decir, se coloca a mujeres jóvenes sin experiencia ni trayectoria política, y son sus “asesores” los que realmente tienen el poder–; también se incrementa la violencia política contra las mujeres; y no en todas las entidades se les coloca en candidaturas con posibilidades de ganar, de manera que, aunque la paridad se respete no significa que en los hechos se consiga la paridad. Esto provoca distintos resultados. En aquellas entidades en las que culturalmente se acepta de mejor manera la paridad, los congresos son más paritarios y se viven menos tensiones por razón de género. En otros la tensión es constante y a menudo violenta. Y en algunos otros ni siquiera se nota, ya sea porque predominan por mucho los hombres o porque las mujeres que llegan al poder no hacen una mayor diferencia. De cualquier manera, la paridad llegó para quedarse y representará tensiones cada trienio, de mayor o menor intensidad en diferentes entidades y a nivel federal.

Los cambios iniciados desde el poder provocan que se comience a reducir la influencia de algunos me-

dios de comunicación tradicionales debido a que disminuye el uso de recursos públicos en los medios. Adicionalmente, comienzan a surgir otros canales de comunicación más horizontales e independientes, que juegan un papel importante para equilibrar propuestas de cambio creando así mayor competencia política. En este escenario, debido a una mayor penetración de servicios de banda ancha y conectividad, la influencia de las redes sociales continúa creciendo como actor fundamental en el movimiento de la información y la comunicación. Los descontentos con el gobierno se hacen visibles gracias a estos medios alternativos.

Para las elecciones de 2024 hay tal descrédito de los partidos y tal presión de la sociedad civil, que el gobierno se ve obligado a realizar una reforma al sistema de partidos, empujando cambios sustanciales en ellos. Los partidos existentes más chicos desaparecen, otros nacen, y se percibe menos corrupción y una mejor fiscalización del dinero en las campañas. Aunque las reformas generan cambios positivos en beneficio de la diversidad de opiniones en los partidos, a nivel local las elecciones de 2024 todavía se ven influenciadas por el crimen organizado, que busca evitar cambios que afecten sus intereses.

Este escenario cuenta la historia de una sociedad civil que después de las elecciones de 2024 y 2027 logra organizarse de manera más efectiva, logra concretar nuevos pactos entre el gobierno y las organizaciones sociales. Ello se traduce en que se planten y se concreten reformas que en efecto valoran y consideran las demandas y las opiniones de las personas. Entre dichas reformas se promulgan las que establecen la revocación de mandato, la segunda vuelta electoral para elegir Presidente de la República, la eliminación del fuero de los políticos y la posibilidad de que un candidato sea reelegido sin estar atado a un partido político en particular. El grado de involucramiento de la sociedad en los espacios públicos se traduce en que la participación política de la ciudadanía

Para las elecciones de 2024 hay tal descrédito de los partidos y tal presión de la sociedad civil, que el gobierno se ve obligado a realizar una reforma al sistema de partidos, empujando cambios sustanciales en ellos.



alcanza niveles nunca antes vistos, y por primera vez hay grandes posibilidades de que sea electa la primera presidenta de México en 2030, que además no pertenece a ningún partido tradicional.

ESTADO DE DERECHO

Este escenario habla de un país donde se le da importancia a las leyes y a las iniciativas para combatir la corrupción. La propuesta central de los actores políticos a favor del cambio implica una transformación del sistema judicial que incluye la inversión de recursos en beneficio de un mayor escrutinio público al trabajo de los jueces, así como en su protección y en el mejoramiento de las condiciones laborales de las policías. El Sistema Nacional Anticorrupción y los correspondientes sistemas locales comienzan a dar resultados. Algunos políticos y empresarios van a la cárcel. Hay una participación preponderante de organizaciones no gubernamentales y de organizaciones internacionales en este proceso. Sin embargo, la ciudadanía continúa estando insatisfecha con el combate a la corrupción y a la impunidad, pues éstas siguen presentes en todos los niveles de gobierno y en muchos de los ámbitos de la vida nacional.

Las desigualdades estructurales en las distintas entidades del país no favorecen los cambios esperados. Se registran avances en la protección de los derechos humanos de grupos históricamente excluidos y sobresalen algunas entidades que logran controlar y mejorar la seguridad mediante el desarrollo de policías y procuradurías más eficaces, sin pactos de impunidad entre políticos, sin pactos con el crimen y a partir de una aplicación más puntual de la ley. Pero otros estados no logran los mismos resultados y ello crea un desbalance muy evidente en cuanto a los niveles de corrupción y al cumplimiento de la ley en el país. En general, aunque hay algunos avances en materia de seguridad, el ejército se mantiene en las calles en tareas de seguridad pública.

En este escenario hay individuos y grupos que luchan por conservar los márgenes de acción que les permitían transgredir la ley, resistiéndose de diversas maneras a los procesos de combate a la corrupción. Para esto utilizan a sus aliados políticos o económicos a fin de intimidar a los responsables de la política

anticorrupción y convencerles de no proceder contra sus intereses. En ocasiones dicha resistencia se manifiesta en acciones violentas —como el secuestro de familiares, extorsiones financieras y amenazas de muerte— en contra de funcionarios, políticos y gobernantes comprometidos con la agenda anticorrupción y el fortalecimiento del Estado de derecho.

No obstante, la corrupción ya no es aceptada como la normalidad en México y hay una nueva generación de jóvenes entre cuyos valores está el de ejercer cero tolerancia con respecto a la corrupción. Jóvenes que forman un frente amplio y sólido desde diversos espacios de incidencia —prensa, cine, música, ciencia, otras artes— en los que incluso se abolen privilegios para disminuir la corrupción. Así, en algunas regiones se evidencia el fortalecimiento del Estado de derecho y una mayor legitimidad de las autoridades, lo mismo que en diversos ámbitos de la sociedad.

VIOLENCIAS

En este escenario las autoridades y los liderazgos federales enfrentan diversos tipos de violencias por parte de actores de la sociedad civil organizada y de un grupo creciente de ciudadanos que empiezan a perder la fe en una solución política.

Se logra disminuir las violencias contra las mujeres, pero más en algunas regiones que en otras. Al documentar estos hechos, la sociedad civil se percató que la clave en la disminución de tales casos radica en la atención y procuración de justicia para las mujeres víctimas de violencia, por lo que se considera aumentar los presupuestos a las instituciones que llevan esta tarea; también se evidencia que en los estados y municipios donde se implementó una Unidad de Policía Especializada, hubo mayores avances en la reducción de las violencias.

Aunque se crean mecanismos para proteger a las mujeres de la violencia y de los feminicidios, en muchos estados las violaciones a sus derechos se incrementan sustancialmente. Un hecho asociado radica en que, a medida que aumenta la presencia de las mujeres en la política, también se incrementa el riesgo de que sean víctimas de distintas formas de violencia, pues su incursión desafía al *statu quo*.



La resistencia a los cambios propuestos —en especial al combate a la corrupción— produce más violencia, en algunas regiones más que en otras. De la misma manera, entre otros fenómenos, la crisis de agua genera conflictos en las regiones donde la problemática es mayor.

El del crimen organizado es un negocio diversificado, con un mercado robusto, entre otras razones porque los vasos comunicantes con autoridades y funcionarios siguen vigentes, ya sea para proteger su territorio, o con relación a contratos de obra pública u otros servicios en el caso de gobiernos locales. Aunque en algunos lugares y regiones estas alianzas han disminuido, en otros se consolidan, lo cual implica que las experiencias de la población sean muy diferentes en materia de seguridad.

Por otra parte, y dado que no se trata de un esfuerzo nacional, esto provoca que células del crimen organizado se desplacen a otras localidades en las que los esfuerzos contra la corrupción y la impunidad o no se llevan a cabo o no dan los resultados esperados. Así, se tienen «islas» de paz y desarrollo, sobre las cuales hay una constante presión por la cantidad de personas que arriban diariamente huyendo de la violencia o en busca de mejores oportunidades de desarrollo.

En este escenario, México también se ve afectado por una crisis ambiental que, además de generar violencia, deja a miles de personas sin acceso a agua potable en diferentes regiones del país.

Asimismo, hay grandes regiones del país en las que hay fuerte presencia del crimen organizado, y la estrategia elegida para combatirlo incrementa la violencia, aumenta el reclutamiento forzado de niños y jóvenes a células criminales, incrementa el desplazamiento forzado, agrava los patrones de exclusión, se limita el acceso a servicios, y se da una pérdida económica y de bienestar.

Sin embargo, en las entidades que se dieron a la tarea de fortalecer sus policías y sistemas de procuración

de justicia, que trabajaron para disminuir la violencia contra las mujeres, que disminuyeron sensiblemente la impunidad, que trabajan con las víctimas y sus familiares; en estas entidades, se observa que hacia 2021 comienzan a instrumentarse programas eficaces de prevención del delito, y que las sinergias con distintos sectores, como el empresarial y sociedad civil organizada promueven oportunidades de empleo y una mayor cultura de la legalidad. Esto comienza a dar resultados alentadores en algunas ciudades que hacia 2024 se miran con sumo interés. En las entidades que continuaron con estos esfuerzos hacia 2030 hay renovada confianza en que se va por el rumbo correcto.

Los proponentes del sistema y algunos grupos de la sociedad civil apoyan el plan para combatir la delincuencia y la pobreza por medio de la creación de nuevas oportunidades de empleo y de una red eficiente —sin clientelismos políticos ni corrupción— que protege a los ciudadanos, sobre todo a las nuevas generaciones. Organizaciones internacionales trabajan con organizaciones locales para apoyar el desarrollo de dichos proyectos. Sin embargo, a veces son esfuerzos aislados que no vienen acompañados de cambios culturales y educativos.

Algunas redes de la sociedad civil logran convertirse en organizaciones políticas ante la disminución de las barreras para aspirar a las candidaturas independientes en el espacio local, sin embargo, esto genera que las redes nacionales se fragmenten y atomicen en la lucha social por la defensa de los derechos humanos.

En este escenario la marginación social aumenta porque hay sectores que no ceden en la búsqueda de sus propias seguridades y riquezas, en perjuicio del bien común y de las personas y grupos más desprotegidos. Aunque el trabajo de organizaciones sociales tiene logros importantes, como el reconocimiento de los crímenes por prejuicio, la impunidad predomina y no se percibe por muchos un cambio real.

DESARROLLO

Este escenario nos habla de la introducción de reformas económicas nacionales para que el crecimiento y la riqueza beneficien a quienes menos oportunidades



tienen. Por ejemplo, se incrementa el salario mínimo para cubrir los niveles básicos de bienestar establecidos por el CONEVAL y se modifica el sistema de impuestos para ampliar la base tributaria. La pobreza llega a niveles de 40 por ciento de la población. Asimismo, los recursos públicos se invierten de manera más eficaz en servicios de educación y salud. Además, proponentes del sistema y grupos de la sociedad civil crean nuevas fuentes de empleo para combatir la pobreza. Sin embargo, el desarrollo económico está más ligado a políticas públicas que a la creación de instituciones que promuevan un crecimiento parejo.

Las reformas tardan en materializar sus resultados, además de que, tras las políticas proteccionistas de Estados Unidos, se genera una fuerte presión sobre las finanzas públicas. Las inversiones en el sector energético disminuyen y la plataforma petrolera decrece. El bajo crecimiento reduce la recaudación de impuestos. Aunado al aumento del costo de las pensiones y del costo financiero de la deuda, esa merma de ingresos deja a las finanzas públicas de México en una situación compleja y delicada, e influye en el incremento de la inequidad del país.

En este escenario, México también se ve afectado por una crisis ambiental que, además de generar violencia, deja a miles de personas sin acceso a agua potable en diferentes regiones del país. En esta crisis las más afectadas son las mujeres, ya que en muchas regiones desempeñan un papel central en la obtención, el manejo y la distribución del agua; por lo que los organismos internacionales impulsan la incorporación de la perspectiva de género en el acceso al agua potable y su saneamiento.

Por presión de movimientos de la sociedad civil, el gobierno se enfoca en inversiones públicas, en especial en materia de infraestructura y educación. Estas inversiones producen resultados importantes en cuanto a la disminución de la inequidad, la inseguridad y la ilegalidad en algunos estados y, en general, mejoran las condiciones de vida. Pero en otros las brechas de inequidad se mantienen o incluso se incrementan y se suman a problemas urgentes vinculados a la corrupción —que por más que se combate no desaparece—, la inseguridad, la violencia generalizada y la falta de representatividad. Así que las reformas implementadas no logran resultados esperados.

Algunas instituciones civiles y universidades realizan esfuerzos en materia de nutrición, seguridad alimentaria, sobrepeso y obesidad que logran impactar de manera puntual a ciertas zonas, pero no tienen manera de tener mayor influencia por la limitación presupuestal y el desinterés por parte de gobierno federal de actuar en conjunto. Algunos gobiernos locales logran avances en esta materia, pero son muy acotados. La prevalencia en enfermedades metabólicas como diabetes y obesidad sigue creciendo.

En algunas regiones se incentiva la producción agrícola y pecuaria para el autoconsumo en el campo, con el fin de intentar mitigar la pobreza de zonas marginadas, lo cual resuelve un problema inmediato, pero sin prever la transición de las personas hacia actividades de mayor productividad y mayor valor agregado. Se percibe un crecimiento de las disparidades regionales, pues hay un traslado de inversiones y capital humano hacia las regiones que cuentan con instituciones que cumplen con sus compromisos frente a la ley, combaten a las violencias y, en general, tienen mejores condiciones para el desarrollo. En algunos casos grandes ciudades se convierten en el polo de atracción de capital y concentradoras de desarrollo y oportunidades, algunas incluso desarrollan una vocación de innovación y apertura de nuevos mercados, en particular en Asia y Europa.

Los cambios implementados no son suficientes para crecer a más de 4 por ciento anual. De manera que México se acerca muy lentamente al nivel de los países desarrollados. A ese ritmo es difícil apreciar las mejoras en el nivel de vida en el día a día, pero los beneficios se muestran sobre periodos largos; así, por ejemplo, los padres perciben que el nivel de vida de sus hijos es significativamente mejor que el suyo. Las condiciones de deuda mejoran en algunos lugares, pero en promedio no mejoran de manera significativa y persiste la falta de transparencia y de rendición de cuentas con relación a la forma en que se endeudan algunos gobiernos locales.

Hay una nueva generación de jóvenes que cree en un México más equitativo, la disminución de las 3 íes empieza a manifestarse de forma irregular a lo largo del país e impacta en el crecimiento y en las oportunidades de este grupo etario y de amplios grupos de la población, por lo que empieza a surgir una nueva ...



clase media. Asimismo, diversas organizaciones de la sociedad civil apuntan a que una inversión que beneficia al conjunto de la sociedad radica en generar más oportunidades de empleo bien remunerado, y más programas para fomentar la autonomía económica de las mujeres mediante financiamiento y capacitación.

En este escenario, se habla de un país en el que algunas regiones más que otras siguen enfocadas en la economía extractiva. Aunque hay inversiones en energías renovables, estas son insuficientes; además, se firman marcos globales para la mejora ambiental, pero no se destinan los recursos necesarios para lograr los cambios deseados a lo largo del territorio nacional. Los impactos en el medio ambiente afectan a unas regiones más que en otras, lo que lleva a desplazamientos de comunidades desprotegidas. Organismos de la sociedad civil organizan campañas sobre la emergencia del cambio climático que ayudan a que, en algunos sectores de la sociedad, se comience a cuestionar la cultura del consumismo y de la explotación. Los cambios no son suficientes para tener el impacto deseado.

México continúa siendo un país con una gran fuerza cultural, y la división que empieza a general el enfoque en la Cuarta Revolución o ciber-industria en los estados del norte, orienta a los del sur a invertir aún más recursos en impulsar su riqueza cultural. La llamada «economía naranja», es decir, el conjunto de actividades que de manera encadenada permite que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, y cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad intelectual, posibilita a las regiones que no tienen acceso a las inversiones provenientes de la ola de la robotización, concentrarse en las fuentes de sustento que han aprendido y desarrollado a lo largo de su historia. Estas comunidades no se quedan atrás y empujan el desarrollo de la economía cultural hasta un punto nunca antes visto. Así, para 200 la «economía naranja» genera el 5 por ciento del PIB nacional.

Para ese mismo año, en materia de educación pública la calidad de la educación en los estados más desarrollados comienza a mejorar de manera importante, con un alto desempeño en la evaluación, lo que profundiza la brecha entre entidades. En materia de salud se avanza en la universalización de los sistemas y

se incrementa la calidad y la cobertura. Sin embargo, hay una crisis en el sistema de pensiones debido a la falta de una cultura de previsión estatal y personal.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este escenario nos habla de un México en el que la participación ciudadana aumenta y logra ejercer presiones importantes para el 2030. En el 2020 el gobierno implementa reformas que generan oposición por razones ideológicas, políticas y económicas. Aunque a muchas personas les parece que las reformas y su manera de aplicarlas resuelven algunos problemas, en general no crean las capacidades necesarias para que la sociedad sea escuchada, pueda generar más valor y se desarrolle sin ayuda del Estado. No obstante, amplios sectores buscan constituirse en un contrapeso de las decisiones articuladas únicamente desde el gobierno. Los espacios de participación ciudadana se cierran aún más y los cambios y acciones impulsados por el gobierno carecen de suficiente legitimidad y apoyo.

Tiene lugar una descomposición de los actores de la sociedad civil, ya que algunas organizaciones y líderes de este sector representan intereses de grupos de poder en el sector público y privado y, con el único fin de avanzar sus intereses gremiales o particulares, llevan a cabo incluso actividades ilegales.

Los grupos de la sociedad civil no están exentos de escándalos por corrupción que salen a la luz pública y, al amparo de la fachada que los presenta como organismos de la propia sociedad, se impulsan agendas que de ninguna manera se relacionan con el bienestar del país. Sin embargo, hay otros organismos que de manera comprometida y ética siguen impulsando los temas de su agenda que es amplia: derechos humanos, derechos de las mujeres, derechos de la diversidad sexual, medio ambiente, la defensa del estado laico, etcétera. Pero lo hacen en condiciones complicadas dado que algunos organismos internacionales disminuyen de manera importante sus apoyos a las organizaciones mexicanas, debido a la desconfianza. Otros organismos internacionales afinan sus mecanismos de apoyo y son un importante factor de crecimiento para organizaciones que están trabajando en la construcción de paz en distintas localidades.



Algunos organismos y gobiernos de ciertas entidades llegan a enfrentarse violentamente, por lo que intervienen organizaciones de derechos humanos como el GIEI —que intervino en el caso Ayotzina-pa—, o SERAPAZ, organismos que invitan al diálogo a las partes en conflicto. Esta posibilidad de dialogar permite a los grupos ciudadanos movilizarse de una manera más efectiva, poco a poco empezar a asumir la importancia de su papel en la sociedad, y cobrar mayor relevancia tras las elecciones del 2024.

MÉXICO Y EL MUNDO

En este escenario, México logra una aceptación moderada a nivel internacional gracias a que en el exterior se reconocen los esfuerzos del Estado por disminuir la violencia, la corrupción y garantizar los derechos humanos. A pesar de que el país tiene dificultades estructurales, se encamina a cumplir compromisos establecidos en la agenda internacional en estos temas. Por ejemplo, se cumple con lo pactado en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), en materia de la atención a las mujeres y a las niñas del país.

A nivel internacional, México refleja los esfuerzos realizados con referencia a igualdad, también evi-

dencia la identificación de diversos temas en que las políticas públicas deben mejorarse, como los mecanismos de investigación, sanción y reparación a las víctimas; el acceso efectivo a la justicia para las mujeres; la sistematización de información; y la eliminación de la trata de personas. Todo ello tiene lugar bajo la presión de la sociedad civil, y aunque con mayores efectos en unas regiones que en otras, se percibe una mejora.

La migración en este escenario se mantiene relativamente estable, y el hecho de que el Estado logre garantizar la seguridad en ciertas regiones del país ayuda a movilizar algo de opinión pública favorable en Estados Unidos, aunque aún existe el discurso racista en segmentos de la sociedad norteamericana. Otras zonas del país no corren con la misma suerte, y el hecho de que el Estado sea incapaz de garantizar la seguridad pública le permite a grupos criminales internacionales operar en ciertas regiones del país.

Finalmente, ante el creciente proteccionismo en algunos países, México apenas es capaz de mantener el *statu quo* de la planta productiva y el empleo, y aunque hay crecimiento del empleo, no incrementa el ingreso de las personas. México sigue siendo muy atractivo para las inversiones de las grandes corporaciones globales. ☹️

Los espacios de participación ciudadana se cierran aún más y los cambios y acciones impulsados por el gobierno carecen de suficiente legitimidad y apoyo.



ESCENARIO 3

TODOS PONEN: MÉXICO RESPONSABLE

Este escenario se caracteriza porque las élites y los dirigentes en los sectores público y privado están dispuestos a sacrificar privilegios personales y gremiales por un bien mayor y colectivo. Al percibir que los otros ponen de su parte, se genera un círculo virtuoso donde la ciudadanía empieza a confiar y a ceder en beneficio del bien común. Esto se traduce en reformas profundas y acciones concretas que, con el tiempo, generan un fortalecimiento del Estado de derecho y cultura de la legalidad. El punto de partida radica en el cumplimiento estricto de la ley por parte de todos. Puesto que este actuar trastoca grandes intereses, en el corto plazo las inequidades y la inseguridad podrían aumentar pero, en el mediano y largo plazo, el trabajo que se lleva a cabo para mejorar la ilegalidad produce un cambio positivo en las otras dos íes (inequidad e inseguridad).

SISTEMA POLÍTICO

Este escenario cuenta la historia de un México donde predomina la incertidumbre y la polarización, variables que se agrava en tiempos electorales. Se produce una necesidad de cambio ante dicha crisis y sobre todo ante la posibilidad de que la confrontación entre las distintas fuerzas y sectores desate un grave caos en el país. El resultado suscita expectativas en los grupos organizados que participaron en el proceso y deciden continuar trabajando juntos.

Los actores superan la frustración de muchos años de hartazgo social, de prejuicios y traiciones, así como el miedo y la desconfianza profunda que prevalecen entre los dirigentes que forman parte del escenario político, económico y social del país. Así, se establecen objetivos y metas que trascienden los plazos electorales. Entre ellos, estrategias para reconocer méritos y retener al mejor talento en los tres órdenes de gobierno y en los tres poderes. Asimismo, se promueve la conformación de gobiernos más incluyentes, plurales, con mayor participación de mujeres y otros grupos hoy marginados o discriminados, y el fortalecimiento del Estado laico.

Las situaciones límite a las que se ha llegado en los diversos campos de lo social orllan a la ciudadanía a desear un cambio que se traduce en compromisos y acciones organizadas y eficaces. Se establecen cuotas para asegurar instituciones incluyentes, se fortalecen los mecanismos de participación ciudadana en los distintos espacios

de toma de decisiones y se multiplican las organizaciones de la sociedad civil que supervisan las labores de las instituciones del Estado (“*watchdogs*”).

La aceptación amplia de la sociedad sobre la necesidad de incluir a todos los grupos logra generar un compromiso real por parte de los poderes legislativos a nivel federal y estatales, así como de los tribunales electorales locales y de las Instituciones Electorales de garantizar una verdadera representatividad donde exista, por ejemplo, la paridad de género de manera horizontal y transversal en la integración de los ayuntamientos y de los congresos locales. Pero más importante aquí es que se empiezan a tener políticas públicas que incluyen a las minorías.

El Congreso de la Unión aprueba la reforma que permite fortalecer la pluralidad en los medios masivos de comunicación y regular la promoción de la imagen personal con recursos públicos. Ello provoca que los medios y las instituciones públicas sostengan relaciones más transparentes y que el contenido de la información sea de mayor beneficio para la ciudadanía, aunque en algunos casos sigan encontrando formas sofisticadas para manipular las noticias. En general, empiezan a existir pesos y contrapesos más claros desde la prensa escrita, electrónica y digital.

Las iniciativas sociales y del gobierno generan debates y reformas que se traducen en la propuesta, el ...



diseño y la instrumentación de nuevas reglas electorales para las elecciones de 2024. Estas pueden incluir desde la introducción de la segunda vuelta electoral, la reglamentación secundaria de los gobiernos de coalición, mayores facilidades en beneficio de la participación de candidatos independientes y/o el establecimiento de un control del financiamiento de las campañas y de los presupuestos públicos de los partidos políticos. Sin embargo, incluye también un aumento significativo del 10 por ciento en el porcentaje de financiamiento público que reciben los partidos para capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres. La suma de todo ello se traduce en elecciones menos polarizadas, con más partidos y más formas de participación política.

Este escenario habla de muchos avances en el sistema político, de suerte que para el 2025 hay un reconocimiento formal de la participación cada vez más organizada de ciudadanas y ciudadanos en la toma de decisiones estratégicas de gobierno. Para el 2030 se aprueba una reforma electoral que permite que el financiamiento a los partidos políticos esté directamente relacionado con la incentivación de la participación ciudadana en las urnas; se establecen procedimientos más estrictos para asegurar el cumplimiento y transparencia del ejercicio del financiamiento público; y en igual forma mecanismos más sólidos y efectivos para dar seguimiento al financiamiento privado. Todo ello para asegurar mayor equidad en los procesos electorales.

Las situaciones límite a las que se ha llegado en los diversos campos de lo social orillan a la ciudadanía a desear un cambio que se traduce en compromisos y acciones organizadas y eficaces.

En este escenario se agota el bono demográfico, lo que significa que se reduce el número de jóvenes en México y el promedio de edad nacional es ahora de 36 años. El país cuenta con una generación de adultos de mediana edad con poca preparación y con poca capacidad de participación, por lo que una ciudada-

nía consciente tendrá que tomar estos fenómenos en cuenta e impulsar la implementación de programas de recuperación. Este escenario también implica que las personas adultas tendrán que prever de manera más realista su futuro, su retiro, al mismo tiempo que la automatización del trabajo produce un cambio en el mercado laboral. Ambas circunstancias generan dificultades para la economía, aunque la mejora moderada en la educación y en los sistemas de redistribución de la riqueza mitigan algunos de esos riesgos.

ESTADO DE DERECHO

Este escenario se caracteriza por cambios importantes que logran fortalecer el Estado de derecho. El primer logro es el establecimiento de una fiscalía independiente gracias al consenso de diversos actores políticos, además de la presión ejercida por organizaciones civiles que desde hace tiempo exigen una fiscalía autónoma y capaz, para asegurar así la independencia política del fiscal general y de las fiscalías especializadas en materia de anticorrupción, delitos electorales y derechos humanos, al incorporar criterios confiables de designación. Se logra que cualquier individuo, aún aquellos con fuero, sea juzgado si está involucrado en casos de corrupción.

Se modifican diversas leyes locales para garantizar la participación de la sociedad civil en temas electorales y se norman la revocación de mandato y el referéndum. También se mejoran leyes que protegen la inversión, la observancia contractual rigurosa y los mecanismos de resolución de conflictos. Empiezan a surgir y a consolidarse observatorios ciudadanos que, de forma cercana y colaborativa, trabajan con diferentes instancias públicas para dar seguimiento al cumplimiento de las leyes y reencauzar así el Estado de derecho. Para 2030 prácticamente se erradica la corrupción en las instituciones de seguridad y justicia, y los jueces son brazo eficaz en la ejecución de sus tareas.

Los avances más significativos se registran en un mecanismo anticorrupción, mismos que generan tensiones porque muchos grupos de poder quieren que la rendición de cuentas no sea retroactiva. El debate en torno al punto de partida para hacer retroactivas las acciones contra la corrupción dura años, lo cual inmoviliza a muchos actores que pu- ...



dieron haber estado vinculados con actos ilegales, de impunidad y de corrupción en el pasado.

El conjunto de estos cambios son el punto de partida de una participación social con mayor incidencia y más activa y, asimismo, generan y promueven ciertos cambios en la propia ciudadanía: hacer trampa, sobre todo en ciertos contextos, ya no es una acción ignorada por los ciudadanos y más bien comienza a ser señalada como indeseable. Además de la creación de las bases para la independencia judicial, los logros de la Fiscalía y del Sistema Nacional Anticorrupción implican cambios significativos a nivel nacional. Sin embargo, hay una disparidad significativa en el funcionamiento de los gobiernos locales.

Bajo este escenario los avances más importantes tienen lugar en la cultura política. Enriquecerse por la vía del servicio público ya no se considera como algo "normal". Se exigen resultados y honestidad en líderes políticos y servidores públicos; se exige la formación de liderazgos bajo esquemas éticos; y se abandona la idea de que "no importa que roben, siempre y cuando hagan cosas". En un marco de derechos humanos e igualdad de género, se da a conocer el perfil de cada funcionario y funcionaria de los tres niveles de gobierno y se conforma un sistema de capacitación para los mismos.

Aunque al principio se genera resistencia por parte de grupos del crimen organizado que no están dispuestos a dejar de ejercer poder e influencia, las presiones sociales y la incorporación de fiscalías independientes logran que aumente la denuncia ciudadana y se empiecen a registrar descensos en la impunidad en la realización de actos de corrupción y otros delitos. En diversas regiones del país se logran diferentes avances, pero en general se ve una mejora.

Tiene lugar una profunda reforma al sistema penitenciario desde una perspectiva de derechos humanos y de género, orientada a terminar con los autogobiernos, y a generar oportunidades que eviten la reincidencia delictiva de quienes cumplen con sus condenas; mejora paulatinamente el sistema penitenciario federal, aunque continúan presentes las dificultades a nivel local. Se hacen más visibles y se ponen en marcha proyectos puntuales para atender las problemáticas específicas de los adolescentes en conflicto con la ley, así como las de las mujeres y las personas indígenas.

Como resultado de esta importante reforma al sistema penitenciario, todos los Centros Federales de Readaptación Social Femenil cuentan ahora con áreas de maternidad, salas de lactancia y guarderías para hijos de reclusas que viven o nacieron en los Centros. Asimismo, en coordinación con las autoridades del sector salud federal y autoridades penitenciarias, se lleva a cabo la estrategia nacional para la atención integral de las personas en reclusión, con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos, la salud y la atención médica.

El sistema de impartición de justicia se ve particularmente presionado por los sectores económicos que exigen un mejor desempeño -más transparencia y celeridad- en los juicios civiles y mercantiles. Por otra parte, la mediación se convierte en un recurso más frecuente y tiene un impacto positivo en la resolución de conflictos entre particulares.

Se avanza en el desarrollo de estadísticas que visibilicen las necesidades de los distintos sectores de la sociedad. Especialmente en las estadísticas de género, se logra convertirlas en información de interés nacional, al tiempo de dar a conocer las necesidades de las mujeres y niñas a detalle. También se logra que todos y todas las mexicanas tengan acceso a servicios de salud integrales, en los que los servidores del sector están comprometidos a brindar servicios de calidad y calidez a las y a los derechohabientes.

A cinco años de haber creado un Sistema Nacional de Cuidados, se cuenta con servicio de guarderías o estancias infantiles, horarios flexibles en los centros de trabajo, licencias de maternidad de por lo menos un periodo de cinco primeros meses y con licencias de paternidad de al menos un mes. Tras haber ratificado el gobierno de México el Convenio 189 de Naciones Unidas, las trabajadoras domésticas del país por vez primera se ven beneficiadas por un salario digno y las correspondientes prestaciones de ley.

VIOLENCIAS

Coyunturas como las elecciones o cambios de gobierno tienen como efecto un recrudecimiento de la violencia y del crimen organizado que trata de influir en los comicios y aterrorizar a la ciudadanía con el fin de mantener



control sobre su territorio y sobre los políticos locales, así como amenazar la vida cotidiana de la sociedad. Además, el crimen organizado no cesa en sus intentos de corromper a los nuevos dirigentes, políticos o de la sociedad civil, y de reclutar a niños, niñas y jóvenes en situación de riesgo. En el contexto de la elección se agudiza la violencia política contra hombres y mujeres.

Los avances en el Estado de derecho ayudan a ir vislumbrando soluciones sobre la violencia, aunque con efectos disparejos. Se crea un proyecto de ley de seguridad interior que se caracteriza por una línea de tiempo bien definida, al igual que por un enfoque en la protección de los derechos humanos, en estrategias de prevención, y un mayor énfasis en seguridad y justicia para grupos históricamente discriminados. Sin embargo, se enfrentan retos importantes en su implementación, como la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. La presión pública por combatir la impunidad se acrecienta y con ello se logra llevar a juicio a algunos responsables.

Se abre una investigación sobre nexos entre políticos y crimen organizado, enfocados en los temas de lavado de dinero y tráfico de armas.

Ante la participación social, se recuperan espacios perdidos y si bien no se elimina, sí se disminuye la incidencia del crimen organizado en la política y en la vida cotidiana de las personas. Se logra crear un modelo policial menos represivo y dejar atrás el enfoque casi militar que había adquirido esa institución tras años de conflictos locales. Esto lleva a una visión de seguridad más humana, y crea el espacio para cultivar una cultura de prevención primaria basada en la educación. El nuevo modelo de seguridad interior logra, en el largo plazo, que las fuerzas militares regresen paulatinamente a los cuarteles.

En general todo ello se traduce en que el crimen organizado esté agazapado en algunos lugares y, en otros, contenido. Sin embargo, hay regiones donde la delincuencia organizada sigue ligada a gobiernos locales, y controla la economía y la política.

En este escenario también se ven esfuerzos consistentes para atender, sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres, las niñas y los niños. Ello contribuye a ejercer una mirada más amplia con respecto

a la atención, sanción y prevención de las violencias contra las mujeres, incluyendo en estas políticas públicas a grupos minoritarios (como son las trans y personas de género no binario entre muchos otros). Personas que antes eran discriminadas, comienzan a gozar de una serie de políticas públicas que los considera y les brinda acceso a las instituciones en igualdad de circunstancias. Desde el poder legislativo, los congresos locales de todas las entidades federativas se comprometen y trabajan para eliminar de sus leyes y códigos civiles y penales todos los preceptos discriminatorios de las mujeres y las niñas. Y, por primera vez, todos los estados también cuentan con leyes en materia de derechos humanos con sus respectivos reglamentos.

Con el tiempo se establecen políticas de prevención a primer nivel y un cambio cultural paulatino que permite que las personas afectadas por la violencia se sientan seguras de hablar y pedir ayuda porque saben que cuentan con servidoras y servidores públicos honestos y capacitados para atender este tipo de casos.

Para 2030, este escenario habla de un México en el que la delincuencia no es el reto principal para el Estado, pues ésta se encuentra disminuida y fragmentada aunque siga presente.

DESARROLLO

Prevalece una disciplina fiscal en el manejo de las finanzas públicas como política de Estado. Esta es la convicción del gobierno pero también se explica por la presión de organismos financieros multilaterales y de las calificadoras. Se manifiesta una reconfiguración económica que va teniendo lugar en virtud de nuevos esquemas laborales, de una mayor formalización de la economía y de una concepción de economía inclusiva que no busca tanto la maximización de la ganancia para unos cuantos como el desarrollo comunitario y las posibilidades para una mayor cantidad de personas. En el largo plazo ello genera un reposicionamiento positivo de la economía mexicana, si bien en el corto produce mayor inequidad.

En general las mujeres se han beneficiado cada día más de programas realizados en el sector social, sin embargo, quedan por atenderse muchos rezagos en las áreas de salud, nutrición y educación, especial-



mente para quienes viven en zonas rurales y de bajos ingresos en los centros urbanos. Los avances benefician a unos actores más que a otros y, aunque la economía vaya en buena dirección, en un principio no todos perciben los resultados.

Unido al empoderamiento social de este escenario, el creciente nivel de la inequidad implica que los grupos excluidos del desarrollo empiecen a ejercer presión para que se creen alternativas y oportunidades con mayor impacto en la sociedad y que, en igual forma, generen un desarrollo más incluyente. Se empieza a dar una mayor innovación tecnológica y crece la economía del conocimiento sustentado en políticas fiscales y en otras políticas públicas. Esto junto con mayor vocación de investigación y desarrollo por parte de la iniciativa privada nacional y extranjera.

El avance tecnológico profundiza la brecha de inequidad a corto plazo, pero a mediano y largo tiene lugar un crecimiento de empresas y un emprendimiento más generalizado, pues los avances y las nuevas estructuras ayudan a disminuir el costo de la formalidad, generando mayor productividad y mejores sueldos. El avance tecnológico se acelera en aquellas entidades que previamente han invertido en la incorporación de servicios y trámites en línea y en la democratización del acceso a Internet, lo que estimula la emergencia de una población tecnológicamente más sofisticada (versus otras entidades que no invirtieron en este rubro).

Se produce una reconfiguración del mercado laboral, con una mayor y mejor educación superior técnica y más afín a las necesidades de los sectores más dinámicos de la economía. La reforma enfocada en las tecnologías de información e innovación es impulsada por los millenials que a su vez exigen más espacios educativos para que los niños tengan esta formación. Esta reforma educativa viene acompañada de la creación de esquemas de seguridad social que permiten la formalización en el empleo y, en el largo plazo, reducir las brechas de desigualdad entre la población

con empleos formales e informales. Aunque persiste la desigualdad regional, se acortan algunas brechas. De igual forma, los sindicatos desempeñan un papel responsable y auténtico en el contrapeso de las fuerzas productoras de la economía, al impulsar la productividad de las empresas y a la vez lograr mejores sueldos y condiciones laborales para los trabajadores.

En general, la política pública es más incluyente y se caracteriza por mayores exigencias a fin de garantizar la protección de todas las personas. En general se reporta una mejora en las condiciones de vida y en el acceso a los derechos económicos, sociales y culturales. Se logra un importante incremento en el número de mexicanos que emprenden y sus empresas aportan dinamismo y riqueza a la economía nacional.

El nuevo modelo educativo arraiga como uno de los grandes proyectos nacionales. Se promueven proyectos específicos como el impulso a las mujeres en la ciencia, que contribuyen a mejorar el acceso a las oportunidades de empleos bien remunerados. Se genera una demanda de educación de calidad de parte de la ciudadanía que contribuye a mejorar el desempeño escolar, aunque aún con diferencias regionales.

Además, se impulsa un modelo educativo enfocado en los derechos humanos que propicia autonomía, pensamiento crítico y sentido comunitario. En la educación superior, se está implementando el proyecto de institucionalización que propone el diseño de una asignatura transversal de perspectiva de género en sus planes de estudio.

En este escenario, se logra articular una sola política en nutrición, salud pública y un sistema universal de desarrollo social, con la participación de distintas dependencias con un solo órgano rector que también incluye la participación de asociaciones civiles, universidades, instituciones de investigación e iniciativa privada creando estrategias integradoras de todas las acciones que atienden la desnutrición, seguridad alimentaria, so-

Los avances en el Estado de derecho ayudan a ir vislumbrando soluciones sobre la violencia, aunque con efectos disparejos.



brepeso y obesidad. Para las enfermedades metabólicas, como la diabetes, se desarrollan programas para que la gente incluya alimentos que mejoran su calidad de vida y no solo se encargan de desincentivar el consumo de los alimentos que no aportan a esto. Con estos esfuerzos se logra frenar el crecimiento acelerado de enfermedades metabólicas y el gobierno federal puede empezar a dedicar más presupuesto a temas de prevención. La pobreza logra disminuir a 30 por ciento, especialmente por el alcance del sistema de seguridad social universal. La pobreza extrema alcanza niveles históricamente bajos de 4 por ciento.

En materia energética, el Estado y la sociedad civil organizada realizan acciones en sinergia para fomentar la generación y el uso de las energías limpias, que además de contribuir al propósito de proteger el medio ambiente, ofrecen oportunidades de iniciar negocios jóvenes, transparentes y comunitarios. Ello ayuda a dismantelar las redes de corrupción entorno a la producción del petróleo y contribuye a que las energías renovables sean la mayor fuente de suministro de energía del país, habiéndose logrado armonizar la inversión del sector privado en infraestructura energética sustentable (ductos, micro presas, parques eólicos, granjas solares, entre otras), y trayendo beneficios económicos a las comunidades en las que se desarrollan dichas inversiones.

En este escenario se crean procesos para empezar a aplicar progresivamente los marcos globales para la protección del medio ambiente. Se crean medidas para limitar el uso del agua, pero también se crean otras medidas que tienen efecto en el mercado, como por ejemplo el consumo de carne. La mejora en la participación ciudadana y en la impartición de justicia empiezan a generar efectos positivos en la aceptación de la emergencia del cambio climático. Se crean nuevos estándares de consulta y se imponen multas por contaminación que desincentivan el incumplimiento de las leyes.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Este escenario habla de un México en el que las tensiones entre la sociedad civil y el gobierno aumentan debido a su constante antagonismo, situación que cambia con el tiempo sin que se generen con suficiente rapidez una clase política y una ciudadanía con clara visión colaborativa; ello en parte debido a la

carencia de referentes exitosos de coordinación y de sumas de esfuerzos entre actores de gran diversidad.

Sin embargo, asumiendo como referentes de experiencia colectiva la movilización solidaria y la energía social desplegadas tras sucesos como el sismo del 2017, en un contexto en el que el descontento es generalizado la sociedad logra organizarse, creando poco a poco una mayor participación ciudadana, no sólo en materia de propuestas, sino también del seguimiento a proyectos diversos, así como al uso del gasto público a nivel federal y local. Se ve un incremento en la participación de las generaciones jóvenes. Cada vez más Influencers y jóvenes de 17 a 32 deciden participar en los procesos políticos y sociales.

La participación ciudadana adquiere una relevancia literalmente inédita. Grupos de actores relevantes, en los que participan políticos, empresarios y organizaciones ciudadanas en distintas regiones del país, se movilizan para perseguir resultados diversos, a partir de necesidades específicas. En este sentido, en un principio hay resistencias a las iniciativas formuladas para reducir la ilegalidad, la inequidad y la inseguridad, sobre todo porque amenazan a numerosos grupos e individuos en razón de los efectos sobre sus negocios, ingresos, privilegios, estilos de vida, e influencias a distintas escalas territoriales.

No obstante, ante el descontento social y la presión de las redes locales y en ciertos casos internacionales, se logran avances de colaboración nunca antes vistos. El gobierno se enfoca en la creación de políticas específicas que logran acortar las brechas de desigualdad, así como en la de mecanismos que facilitan la participación entre el propio gobierno y la sociedad civil, y crean mecanismos accesibles para rendición de cuentas. La mejora en el cumplimiento de sus obligaciones ciudadanas ante el Estado les brinda estabilidad y seguridad jurídica a quienes arriesgan su capital, generan empleos e impulsan la economía. En este escenario, emigrar de un régimen de salarios mínimos regulado por entidad, a un sistema de ingresos per cápita por escolaridad, resultados, horas, riesgo, etcétera, junto con la mejora en los servicios de la salud, la educación y el transporte público, lleva a obtener resultados muy prometedores.

Además, se avanza en el entendimiento de los derechos humanos como normas que confieren derechos ...



Se imponen obligaciones, pero también como la razón que justifica la existencia misma del Estado; así pues, se avanza en el fortalecimiento de la garantía de los derechos humanos. Este logro facilita la integración de migrantes y deportados provenientes de los Estados Unidos, que en lugar de ser considerados como una carga para la sociedad, empiezan a ser valorados como seres humanos con gran potencial en referencia a diversas actividades económicas. Ellos, a su vez, empiezan a ver el vivir en México como una opción viable.

Ciertos grupos expresan su rechazo a las reformas planteadas y generan tensión. Se observan linchamientos políticos, pero una mayor transparencia en la impartición de justicia eventualmente logra contener este ánimo social. Al inicio, el enfrentamiento entre estos grupos y las instituciones generan inestabilidad en ciertas regiones y se desatan conflictos que pueden escalar en violencia.

Los poderes fácticos afectados por distintas vías continúan pujando por un regreso al pasado. Sin embargo, un desarrollo económico dinámico y superior al 4 por ciento, en un país pacífico con una sociedad más justa, inhiben el crecimiento de estas voces.

MÉXICO Y EL MUNDO

Las iniciativas en México para reducir la ilegalidad, la inequidad y la inseguridad logran que el país deje de ser considerado como peligroso, corrupto y violento por la comunidad internacional, lo que genera una mayor apertura en las relaciones con gobiernos de la región y del resto del mundo. Esto contribuye a que México sea capaz de incidir positivamente en su imagen en Estados Unidos, lo que a su vez ayuda a disminuir los sentimientos y expresiones racistas o anti-mexicanas en dicho país. De alguna manera, se incrementa el costo de llevar a cabo acciones racistas y anti-mexicanas.

En este escenario, el lograr una mejora en el capital humano a mediano plazo permite generar más valor agregado. De esta manera las pequeñas y medianas empresas empiezan a integrarse a las cadenas globales de valor en las que no participaban en el pasado. Eso permite una integración más armónica de México en el mundo. La creciente competitividad de México le permite también diversificar sus mercados.

Una economía incluyente empieza a ofrecer alternativas viables a las empresas transnacionales, a la vez que cada vez más se cierra la brecha entre México y sus países en materia de: condiciones de trabajo, remuneraciones y cuidado al medio ambiente.

El fortalecimiento institucional de México también permite una participación más activa de la sociedad civil, academia, empresarios, y esto les genera una mayor incidencia o mejor capacidad de gestión en diferentes foros internacionales, y en general, en el concierto internacional. Este mismo fortalecimiento institucional dificulta que las organizaciones criminales transnacionales reten al Estado mexicano.

Los cambios vinculados a las mejoras en el Estado de derecho posicionan al país como un referente en el cumplimiento de la agenda internacional de desarrollo y, aunque hay rezagos importantes en algunos municipios, éstos tienden a mejorar al ingresar a México en una inercia organizada que genera el apoyo de una gran diversidad de actores.

En 2030 México se consolida como referente internacional, en virtud de haberse transformado en una sociedad moderna, con altos niveles de bienestar, seguridad y justicia. Los políticos mexicanos dejan de ser identificados por los altos niveles de corrupción y, en cambio, son reconocidos por su profesionalismo, eficacia y vocación de servicio público. ☉

Se ve un incremento en la participación de las generaciones jóvenes. Cada vez más influencers y jóvenes de 17 a 32 deciden participar en los procesos políticos y sociales.



ESCENARIO 4

TODOS PIERDEN: MÉXICO FALLIDO

Este escenario se caracteriza por la disrupción, donde la sociedad se polariza. Algunos apoyan un estado de excepción para establecer el orden público, otros no confían en las autoridades y deciden tomar la justicia por sus propias manos, y la mayoría se encuentra amenazada entre estos dos grupos. Las 3 íes se deterioran, aunque se mantienen islas funcionales.

SISTEMA POLÍTICO

Este escenario cuenta la historia de un México en el que la democracia paritaria enfrenta niveles una grave polarización y un desencanto que detona numerosas movilizaciones, muchas de ellas violentas y en las que incluso llegan a perderse vidas humanas. Aunque en los procesos electorales no se concluye que los comicios hayan sido fraudulentos, cada proceso electoral viene acompañado de una profunda y extendida convicción de ilegitimidad.

En respuesta a la crisis, el gobierno otorga más poderes al Ejecutivo, deteriorando los contrapesos institucionales. La inestabilidad también lleva a que el gobierno recurra a políticas que hubieran sido más controversiales en otros momentos de la historia. Al estar cansados de la inestabilidad, un grupo significativo de la población apoya la “mano dura” del gobierno, y en nombre de la seguridad, se acude al uso de la fuerza. Aunque grupos de la sociedad civil sostienen que las medidas tomadas están siendo extremas y se multiplican, el uso de la fuerza violatoria de derechos humanos permanece impune. Dado que se cuenta con el apoyo de un segmento importante de la sociedad, no hay presión social significativa para atender dichas violaciones. Esto lleva a una profundización en la polarización ya existente entre aquellos que apoyan al gobierno, y aquellos que están en contra.

El gobierno aprovecha el apoyo para impulsar reformas que conducen a una mayor centralización de los procesos electorales, económicos y sociales. Se elimina el financiamiento público de los partidos y es abolido el principio de representación proporcional, de manera que los legisladores plurinominales desaparecen y se reduce la pluralidad en la integración del Congreso Federal y de las cámaras legislativas locales en las

elecciones de 2024. Así, México retrocede a un punto en el que un partido por sí mismo ejerce el control de los cuerpos legislativos nacional y locales, o lo hace mediante muy pocas alianzas, generalmente con partidos que subsisten con un reducido porcentaje de votos.

A nivel nacional el control gubernamental del Congreso de la Unión se traduce en reformas centralizadas. Se intensifican los discursos y los movimientos demagógicos y populistas de izquierda y de derecha, lo que continúa alimentado una severa polarización. La inestabilidad política da paso al resurgimiento de un partido hegemónico en los comicios de 2024 y con ello se reinstaura un acusado centralismo. Los avances logrados en materia de transparencia, evaluación y rendición de cuentas se ven frenados y el gobierno coopta o desaparece algunos de los órganos autónomos.

El gobierno aprovecha su posición de dominio para que se promulgue una reforma que incrementa el porcentaje mínimo necesario de votos para que los partidos conserven su registro; crea mayores barreras a la participación de los candidatos independientes; modifica las reglas de financiamiento público, así como las de acceso a las concesiones de radio, televisión e Internet y, el acceso a las redes sociales. Y en igual forma ejerce control sobre la generación de contenidos en los medios, con el fin de favorecer a la «partidocracia» y sobre todo al partido en el poder.

Al mismo tiempo, las políticas del gobierno representan un riesgo de retroceso en los grandes logros que se habían alcanzado con respecto a la paridad de género, la libertad de prensa, la transparencia de la información y prácticamente con relación al resto de los avances que



le habían conferido legitimidad al Estado desde mediados de los años noventa. Hay un incremento de la impunidad legitimada por las instituciones, y las autoridades electorales -INE, FEPADE, Tribunal Federal Electoral- se subordinan al Poder Ejecutivo y sesgan los procesos electorales a favor del partido en el gobierno.

Durante su mandato el gobierno logra establecer políticas y acciones importantes, como la legalización y regularización de algunas drogas; una reducción de impuestos que satisface a muchos, aunque la medida genera un aumento de la deuda pública; y el incremento de programas sociales que reducen temporalmente los índices de pobreza, considerados por algunos como programas dirigidos a fortalecer el clientelismo. El gobierno decide eliminar las restricciones al clero para participar en asuntos públicos, y su visión y opiniones sobre temas como el aborto y el matrimonio igualitario recuperan espacios en el debate público; y en algunas entidades la agenda de los derechos de las poblaciones LGBTI es invisibilizada, mientras que en otras hay retrocesos donde se criminaliza a sus miembros.

Las elecciones que se celebran son más cuestionadas aún y provocan que se reactive en la opinión pública la expresión “dictadura perfecta” para identificar la naturaleza del Estado mexicano y del régimen político. Algunas organizaciones civiles son cooptadas por el gobierno y algunas otras tienen que radicalizarse en la protesta para exigir la liberación de presos políticos, académicos encarcelados, o personas víctimas de desaparición forzada.

ESTADO DE DERECHO

En este escenario, la inestabilidad política obliga al gobierno a establecer el estado de excepción, de manera que se restringen y en su caso se suspenden derechos fundamentales de la población. Se vive un periodo de represión general de la ciudadanía y de una crisis caracterizada por la violación sistemática de los derechos humanos. Aunque muchos apoyan dichas políticas porque sienten que es la única manera de mantener un nivel de control ante el caos, muchos grupos de la ciudadanía no apoyan al gobierno y se movilizan para expresar su indignación. Algunos de estos grupos deciden unirse a organizaciones del crimen organizado que han asumido el control de ciertos territorios; otros crean sus propias guardias civiles —blancas o ciudadanas—, y otros más acuden a organismos internacio-

nales para generar presión sobre el gobierno desde el exterior. Se agrava la represión y criminalización de los movimientos sociales; de las organizaciones ciudadanas; y de las mujeres y los hombres defensores de los derechos humanos.

México se encuentra inmerso en una grave crisis del Estado de derecho, a un grado tal que se normalizan los linchamientos como una manifestación extrema de la injustificable y falsa justicia ejercida por mano propia, al margen del sistema judicial. Tiene lugar un retroceso en el sistema de justicia penal acusatorio, pues grupos organizados hacen campañas en defensa de sus intereses políticos y económicos. Después de las elecciones de 2024 el gobierno impulsa la promulgación de reformas que limitan el alcance de las leyes de transparencia y de acceso a la información. La corrupción aumenta a niveles nunca antes vistos. También se regula el uso de la fuerza por agentes privados, quienes utilizan mercenarios para garantizar su seguridad.

Organismos locales e internacionales se unen para crear conciencia a nivel nacional e internacional sobre la situación en el país, y el sistema Interamericano de Derechos Humanos formula recomendaciones al Estado mexicano. El gobierno responde justificando sus acciones, sosteniendo que los índices de seguridad han avanzado en ciertas partes del territorio gracias a éstas, y asegurando que el apoyo que tienen de una parte de la sociedad es muestra de la importancia de seguir luchando contra los grupos que, según ellos, atentan contra la democracia y la seguridad del país. La presión ejercida logra que el Estado se comprometa a implementar más programas de sensibilización para la protección de derechos humanos, pero las violaciones a estos derechos continúan y la polarización se profundiza.

Hay un gran retroceso en los avances que se habían hecho con respecto a la protección de derechos humanos en México, específicamente la reforma de 2011 y el principio de convencionalidad. Además de esto, se empieza a ver el establecimiento de excepciones a las leyes que habían sido creadas para proteger a los grupos excluidos de la discriminación.

VIOLENCIAS

Bajo este escenario el país vive un incremento generalizado de las 3 íes. Los brotes de violencia que



hasta el momento habían estado limitados a sectores muy específicos del territorio se vuelven cada vez más comunes, alcanzando un sector importante del territorio. La población en ciertas regiones se siente desprotegida, pero aquellos que viven en grandes ciudades no logran conectarse con este sentimiento, pues el control del Estado y la fuerza logran mejoras en la seguridad en estos lugares, y su realidad es completamente diferente. En este escenario la violencia cobra mayor complejidad, pues hay un incremento del crimen organizado, vinculado ahora al terrorismo internacional. Los grupos y organizaciones criminales que además de aterrorizar a la población en distintas regiones del país, se apropian de recursos naturales y se involucran en ataques cibernéticos criminales.

Existen sectores de la ciudadanía que no confían en el gobierno y deciden encargarse de su propia seguridad. Con esto, se multiplican las redes de autodefensa, es decir, los grupos de ciudadanos y ciudadanas armados. Aunque no es el caso de todos, algunos de estos grupos se unen a organizaciones criminales. Otros se organizan y se convierten en una voz fuerte de descon-

El gobierno ejerce control sobre la generación de contenidos en los medios, con el fin de favorecer a la «partidocracia» y sobre todo al partido en el poder.

tento. Este fenómeno se traduce en el crecimiento y el fortalecimiento de poderes fácticos y, en el largo plazo, se transforma en una rebelión civil generalizada, conformada por grupos anti-sistémicos o guerrilleros. Así pues, la sociedad, las fuerzas militares y el crimen organizado se protegen, atrincherándose.

En este escenario tiene lugar un incremento drástico de la violencia contra mujeres, niñas, niños y grupos vulnerables. Las mujeres se ven violentadas por la limitación del acceso a la salud sexual y reproductiva y se ven afectadas por la criminalización del aborto. Se da el encarcelamiento por el delito de abortar y muertes que pudieron ser evitadas en otras condi-

ciones. Además, la falta de educación sexual produce un aumento de la población y de enfermedades transmitidas sexualmente, así como un incremento de la tasa de fecundidad adolescente que llega a alcanzar tasas exponenciales. Los derechos sexuales y reproductivos son violados en este escenario.

El muy señalado incremento de la muerte de periodistas y de defensores de derechos humanos en el ámbito local, alarman a la población en las diversas regiones del país. Hay voces que se alzan enérgicamente contra el gobierno en todos los grupos y sectores: Iglesias, empresarios, intelectuales, artistas, académicos. El gobierno ha perdido el control de algunos territorios y recursos, ahora bajo el dominio de los nuevos grupos armados, y cotidianamente se vive una violencia inédita. Bajo este escenario muchas familias y comunidades se dividen debido a los desplazamientos a los que se ven forzados al huir de la violencia. El miedo y la polarización imperan y, por tanto, se incrementa la desconfianza generalizada que vulnera la cohesión y los vínculos sociales.

Sigue en aumento el número de feminicidios en el país, pues en promedio diariamente son asesinadas nueve mujeres por su mera condición de género, víctimas de crímenes por convicción. Menos del 10 por ciento de los agresores son perseguidos o detenidos.

DESARROLLO

Este escenario cuenta la historia de un país enormemente fragmentado, con niveles de desarrollo que se caracterizan por una gran desigualdad entre regiones. Por ello el estado en el que se encuentran las 3 íes varía significativamente en las distintas comunidades del país; las zonas más prósperas se encuentran protegidas por las fuerzas armadas, otras zonas con menos control del Estado se encuentran con su economía y desarrollo paralizados. En muchos casos, estas zonas con menos prosperidad se encuentran sujetas a la extorsión y al control del crimen organizado. Ello plantea la urgente necesidad de impulsar un desarrollo apuntalado en agendas y políticas locales, mismas que empiezan a cobrar mayor importancia y utilidad que las concebidas a escala nacional. A este propósito, se evidencia un retraso generalizado en el cumplimiento de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



En este escenario, el gobierno decide priorizar el desarrollo económico, sin establecer marcos jurídicos e instituciones adecuadas para ordenar la explotación de recursos naturales. Grandes empresas multinacionales mineras y energéticas aprovechan este ambiente, pero la degradación ambiental que impacta a comunidades enteras termina por crear olas de desplazamiento por deterioro extremo de algunas zonas. La sociedad civil organizada trabaja para presionar al gobierno, pero distintas agendas terminan por enfrentar y dividir a diferentes grupos, limitando el alcance de las campañas.

Aquellos que pueden hacerlo, se van del país en busca de mejores condiciones para vivir. Estas personas cuentan con un nivel de educación elevado, de suerte que en este periodo México sufre la mayor fuga de talentos y élites de su historia, en un contexto en el que el país contribuye con menos del 1 por ciento a la producción mundial de conocimiento.

Aunque en su gran mayoría estas personas continúan vinculadas a México, al tiempo de contribuir de distintas maneras al bienestar nacional -por ejemplo, mediante el envío de recursos con fines diversos-, las consecuencias de dicha fuga de talentos afectan severamente el desarrollo del país y agudizan la crisis económica. Cada vez con mayor frecuencia las élites que deciden permanecer, viven en zonas semejantes a micro-ciudades, protegidas por servicios de seguridad y sin tener que negociar cotidianamente su convivencia con los otros, a quienes se les ve como distintos. Esto genera mayor aislamiento que vulnera el tejido social y que contribuye a una mayor desigualdad, desconfianza e intolerancia entre la ciudadanía.

Este escenario habla de un incremento de la pobreza y de la pobreza extrema en ciertas regiones del país sobre todo en las que la población indígena es mayor. Asimismo, la miseria que se contempla en las zonas marginales urbanas es peor aún que la precariedad de la pobreza en el campo, lo que se vuelve una coyuntura ideal para el reclutamiento del crimen organizado por parte de quien la padece. La pobreza alcanza casi el 60 por ciento de la población.

Estas situaciones de precariedad estimulan movimientos de acción ciudadana en las comunidades, en las que la calidad de servicios públicos como la

educación y la salud se deterioran; razón por la que algunas comunidades trabajan juntas y mediante el uso de la tecnología acceden a redes ciudadanas para proveer y proveerse de dichos servicios hasta donde les es posible. Estos grupos enfocan sus esfuerzos al cuidado del medio ambiente y a su explotación sustentable, de suerte que hay regiones en las que se impulsa el desarrollo de economías locales y sostenibles, que a su vez fortalecen los mercados en dichas regiones y localidades.

En temas de desnutrición, seguridad alimentaria, sobrepeso y obesidad, algunas organizaciones civiles, instituciones de investigación y universidades logran ciertos avances en algunas zonas. Sin embargo, no se aprovecha este conocimiento local y experiencia para impactar a nivel nacional. Sigue creciendo aceleradamente la prevalencia en diabetes y obesidad y hay muy poco control de estos padecimientos en las instituciones públicas.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

En este escenario se cuenta la historia de un México en el que, a pesar del aislamiento que priva en algunas regiones y del caos y de la violencia presentes en muchos lugares del país, mujeres y hombres de numerosas comunidades son capaces de romper con estados previos de apatía y de organizarse e impulsar proyectos de distinta naturaleza, bajo diversos modelos de gestión. Ello para resolver problemas de manera autónoma y, asimismo, en colaboración con otras comunidades y grupos, a fin de generar oportunidades de desarrollo familiar, individual y colectivo.

La falta de legitimidad del gobierno ante algunos grupos de ciudadanos, el incremento de violencia que viven muchos por parte del Estado y el aumento en la presencia y control de la delincuencia organizada, conllevan a un sacudimiento que estimula y da pie a una reconfiguración del tejido social, en algunos casos pacífica y en otros muy violenta, con sectores de la sociedad que cada vez se radicalizan más. Los grupos que apoyan al gobierno se vuelven cada vez más organizados y se movilizan para contrarrestar los efectos negativos de aquellos que se expresan en contra. Se agudiza la polarización. Como parte del sacudimiento, en este escenario se activan redes ciudadanas que



transcenden las fronteras por medio del uso de las tecnologías digitales y estos grupos reciben apoyo de ciudadanos y organizaciones de todo el mundo.

En este escenario la falta de presencia del Estado en diversas regiones y sectores del país estimula el impulso de nuevos modelos de participación y colaboración -entre los que están igual radicales que innovadores- bajo cuyos esquemas los ciudadanos aprenden a trabajar en conjunto y a auto-organizarse a fin de generar, proyectos en materia de educación, desarrollo productivo y sostenibilidad entre otros.

Además del enfoque en iniciativas, en este escenario la sociedad busca crear espacios de diálogo y colaboración para impulsar soluciones de raíz a los más diversos problemas de las comunidades; dinámica en la que participan académicos que comparten su conocimiento y experiencia, y de esta manera, se empiezan a dar un trabajo colectivo.

Lo mismo de manera pacífica que violenta, los pueblos originarios también se organizan para fortalecer su autonomía y la protección de sus territorios en las distintas regiones del país. En muchos casos se tienen que adaptar a la crisis provocada por el incremento de quienes, en calidad de trabajadores indocumentados, son deportados de los Estados Unidos a México. Muchos regresan tras haberse enriquecido con las experiencias, los conocimientos y las prácticas adquiridos en el país vecino, en contacto con personas educadas en el manejo de tecnologías de la comunicación y de muchos otros tipos.

MÉXICO Y EL MUNDO

Debido a la inestabilidad generalizada que vive México en este escenario, hay un crispamiento de las relaciones de México con otros países. La situación del país se presta para que el crimen organizado internacional encuentre un caldo de cultivo fértil para sus operaciones. Esto conlleva a una agravación en la situación en la frontera con los Estados Unidos, y no sólo se materializa la construcción de un muro

—sosteniendo que es la única manera en la que los Estados Unidos puede protegerse—, sino que además crece el discurso xenofóbico y los sentimientos anti-mexicanos. Aún peor, se produce una obstaculización de todas las transacciones fronterizas, que conlleva a un entorpecimiento generalizado de la actividad entre los dos países vecinos.

En correspondencia con estas decisiones y acciones, el gobierno vecino aprueba una ley para repatriar a los indocumentados mexicanos en forma inédita, lo que genera una masa de migrantes para cuya recepción el país no está preparado. A ello se suma el hecho de que México se convierte en el nuevo destino promisorio a consideración de quienes en la región buscan un mejor futuro; de suerte que a la ola de quienes regresan de los Estados Unidos, se unen migrantes provenientes de Centro y Sudamérica. Al mismo tiempo, mexicanos afectados por la inseguridad y los efectos del cambio climático en el territorio buscan salir del país a como dé lugar.

Debido a los nexos creados por las organizaciones sociales con instituciones internacionales, este escenario es uno de los de mayor injerencia extranjera, protagonizada por diversos países. Las organizaciones de la sociedad civil rechazan tajantemente la intromisión de potencias extranjeras en México. Al mismo tiempo, muchos programas son financiados desde el exterior y por las regiones más ricas del país, lo que genera nuevos lazos de nuestro país con el mundo.

En el ámbito internacional México es percibido y considerado como un Estado fallido. Como el Estado de un país que “a partir del 2006” se vio envuelto en una sangrienta y fracasada guerra contra el crimen organizado; en el que la corrupción generada en el ámbito de las relaciones entre políticos, contratistas y grupos de delinquentes, contribuyó a la espiral de violencia que se extendió a parte importante del territorio; donde la ausencia del Estado de derecho fomenta la trasgresión sistemática de la ley y la impunidad; y donde se encumbraron gobiernos autoritarios que ejercieron un mayor centralismo en detrimento de las libertades económicas, políticas y sociales de los ciudadanos. ☹

PARTICIPANTES

Grupo de trabajo 2015-2018

- A** | 1. Adalberto Saviñón D.
2. Agustín Coppel Luken
3. Alberto Fernández Martínez
4. Alejandro Ramos
5. Alexandra Haas Paciuc
6. Ana Laura Magaloni Kerpel
7. Ana Lorena Delgadillo Pérez
8. Angélica de la Peña G.
9. Areli Rojas Rivera
10. Armando Ríos Piter
11. América Ávalos
- B** | 12. Bernardo Martínez
- C** | 13. Carlos Alberto Cruz Santiago
14. Carlos Brito
15. Carlos Domínguez Ahedo
16. Carlos Elizondo Mayer-Sierra
17. Carlos Garfías Merlos
18. Carlos Lever Guzmán
19. Carlos Quintero
20. Cecilia Lavalle Torres
21. Claudio Lomnitz
22. Clemente Castañeda Hoeflich
- D** | 23. David Cabañas
24. David Rivera Medina
25. Diego Petersen Farah
26. Edmundo Vallejo
- E** | 27. Enrique Zambrano
28. Esmeralda Estrada Pérez
29. Eufrosina Cruz Mendoza
- F** | 30. Felipe Canseco Ruiz
31. Fernanda Zorrilla Amaya
- G** | 32. Gabriel Oswaldo Contreras Saldívar
33. Gabriel Soto Climent
34. Gabriela Hernández Cardoso
35. Gabriela Warkentin
36. Gastón Luken Aguilar
37. Giulliano Lopresti
38. Gonzalo Hernández Licona
39. Guillermo Ortiz Mondragón
40. Gustavo Guzmán Favela
- H** | 41. Hilario Durán
- I** | 42. Irene Espinosa
- J** | 43. Javier Mancera Arrigunaga
44. Jorge Suárez Vélez
45. Jorge Tello Peón
46. José Ignacio Ávalos
47. José Luis Chicoma
48. José Luis Pliego Corona
49. José Luis Vergara Ibarra
50. Juan Pablo del Valle
51. Julio Madrazo García
- L** | 52. Laura Rojas
53. Leticia Bonifaz Alfonso
54. Leticia Jáuregui Casanueva
55. Lía Limón García
56. Lorena Cruz Sánchez
57. Lorenza Martínez Trigueros
58. Lucila Servitje
59. Luis Antonio Ramírez Pineda
60. Luis Berrondo Barroso
61. Luis Carlos Ugalde
62. Luis De la Calle Pardo
63. Luis Raúl González Pérez
64. Luis René Martínez Souvervielle
65. Lydia Cordero Cabrera
- M** | 66. Maite Azuela
67. Marcelina Bautista
68. María Elena Morera Mitre
69. María Luisa Gutiérrez Santoyo
70. Mariana Benítez Tiburcio
71. Maricela Contreras Julián
72. Marilu Padua Orihuela
73. Mario Delgado
74. Martha Sánchez
75. Mauricio Meschoulam Uziel
76. Max Agustín Correa Hernández
- N** | 77. Nubia Macías
- O** | 78. Obdulio Ávila Mayo
- P** | 79. Pedro Kumamoto
80. Pedro Salazar Ugarte
- R** | 81. Rebeca Garza
82. Roberto Campa Cifrián
83. Rossana Fuentes Berain
- S** | 84. Sabina Berman Goldberg
85. Sabino Bastidas Colinas
86. Salomón Chertorivski
87. Selene Ferreyra
- T** | 88. Tukarima (Marina Carrillo Díaz)
- V** | 89. Verónica Baz
90. Valeria Scorza
91. Vidal Llerenas
- Y** | 92. Yuriria Sierra

DONANTES

- Abelardo Morales
- Aeromexico
- Agustín Landa
- Alberto Garza Santos
- Alberto Santos
- Alberto Sepúlveda
- Alejandra Cortés
- Alejandro Elizondo
- Alejandro Martínez
- Alfonso Cortina Alcántara
- Alfonso González Migoya
- Alfredo Alfaro
- Alonso Gómez Saenz
- Alumnos 47
- Álvaro Fernández
- Ángel Cassan
- Antonio Barceló Garza
- Antonio Leonardo Castañón
- Armando Garza Sada
- Armando González Gutiérrez
- Aspen Institute México
- Banco Interamericano de Desarrollo
- Bernardo Canales
- Bernardo Guerra
- Bernardo Jaime
- Blanca Treviño
- Brandon Milmo Brittingham
- Brenda Garza
- Carlos Bracho
- Carlos Carrillo
- Carlos Fernández
- Carlos Oreindán
- Carlos Peyrerlongue
- Causa en Común
- Celina Canales
- César de Anda
- CI Banco
- Comisión Nacional de Derechos Humanos
- Consejo de Desarrollo Económico de Mexicali
- Constanzo Villarreal
- Cristina Canales
- David Gutiérrez
- De la Calle Madrazo Mancera
- Dieter Lorenzen
- Edmundo Vallejo
- Eduardo García López
- Eduardo Garza Junco
- Enrique Marcos
- Enrique Tellez
- Erich Meyer
- Erika Patrón
- Ernesto López Clariond
- Esteban Malpica
- Ethos Laboratorio
- Eugenio Gutiérrez Noriega
- Federico Clariond
- Federico Pozas
- Fernando Canales Seltzer
- Fernando Ramos
- Fernando Rodríguez
- Francisco Garza Eglloff
- Fundación Alsea
- Fundación Avina
- Fundación Banorte
- Fundación Bimbo
- Fundación Cinépolis
- Fundación Crea México
- Fundación Diéz Morodo
- Fundación FEMSA
- Fundación GBM
- Fundación Genera
- Fundación Kaluz
- Fundación Lala
- Fundación Ocesa
- Fundación Roberto Hernández
- Fundación Shell México
- Gabriela Hernández
- Gonzalo Aguilar Sinzer
- Guillermo Buitano
- Guillermo Sada Solano
- Guillermo Torre
- Grupo Proeza
- Gustavo Mohar
- Horacio Lozano
- Hugo Martínez Macnaught
- Ignacio Martínez
- Instituto Mexicano para la Competitividad
- Irene Espinosa
- Itziar de Luisa Plazas
- Iván Cruz Bencomo
- Jaime David
- Jaime Zabludovsky
- Jan Hintze Calleja
- Javier Gutiérrez Rodríguez
- Jesús Acosta Verde
- Jesús García Pons
- Joaquín Patrón
- Joel Zorrilla
- Jorge Arce
- Jorge de la Garza
- José Manuel Ruiz
- José Víctor Rodríguez Barrera
- Juan Carlos Herrera
- Juan Carlos Pardo
- Juan Manuel González Bernal
- Juan Mario Garza
- Juan Morales
- Leonardo Ruíz Carbo
- Luis Alberto González
- Luis Hernández Rangel
- Luis Vázquez Senties
- Marco Michelle
- María del Carmen Montes Gerardo
- María Elena Suárez
- Mariana Cordera
- Mariana Saenz
- Martín Hernández
- Mary Julia Ruiz Carbo
- Mateo Lejarza
- México Media Lab
- México Unido Contra la Delincuencia
- Miguel Ángel Moratinos
- Miguel Escobar
- Nathan Steremberg
- Nicolás Mariscal Servitje
- Octavio Rodríguez
- Oswaldo Ponce
- Patricia Durán
- Pedro Aspe Armella
- Pedro Jorge Villarreal
- Promotora Social México
- Ramón Leal
- Raúl Baz Harvill
- Raúl Pérez Madero
- Ricardo Martín Bringas
- Roberto García Olavarrieta
- Roberto Rock
- Rodrigo Bueno
- Salvador Alva
- Salvador Arroyo Rodríguez
- Sergio Argüelles
- Sergio Gutiérrez Muguerza
- Socorro Díaz
- Teresa González de Bracho
- Tonatiuh Salinas
- Tresalia
- Universidad Nacional Autónoma de México
- Víctor Decrescenzo
- Wolfgang Hahn

Agradecemos la confianza y el apoyo de quienes han hecho posible esta iniciativa: